su *carte octroyée,* prometida en el momento mismo de la disolución: pese a estas tormentas, el imperio sería liberal y parlamentario. Aunque la ausencia de una honda crisis de independencia aseguraba que el poder político seguiría en manos de los grupos dirigentes surgidos en la etapa colonial, había entre éstos bastantes tensiones para asegurar al imperio brasileño una existencia rica en tormentas. En ellas encontraremos un eco más apacible de las que conmovían a la América española; unas y otras nacían de la dificultad de encontrar un nuevo equilibrio interno, que absorbiese las consecuencias del cambio en las relaciones entre Latinoamérica y el mundo que la independencia había traído consigo.

Capítulo 3
La larga espera: 1825-1850

En 1825 terminaba la guerra de Independencia; dejaba en toda América española un legado nada liviano: ruptura de las estructuras coloniales, consecuencia a la vez de una transformación profunda de los sistemas mercantiles, de la persecución de los grupos más vinculados a la antigua metrópoli, que habían dominado esos sistemas, de la militarización que obligaba a compartir el poder con grupos antes ajenos a él... En Brasil una transición más apacible parecía haber esquivado esos cambios catastróficos; en todo caso, la independencia consagraba allí también el agotamiento del orden colonial.

De sus ruinas se esperaba que surgiera un orden nuevo, cuyos rasgos esenciales habían sido previstos desde el comienzo de la lucha por la independencia. Pero éste se demoraba en nacer. La primera explicación, la más optimista, buscaba en la herencia de la guerra la causa de esa desconcertante demora: concluida la lucha, no desaparecía la gravitación del poder militar, en el que se veía el responsable de las tendencias centrífugas y la inestabilidad política destinadas, al parecer, a perpetuarse. La explicación era sin duda insuficiente, y además tendía a dar una imagen engañosa del problema: puesto que no se habían producido los cambios esperados, suponía que la guerra de Independencia había cambiado demasiado poco,

que no había provocado una ruptura suficientemente honda con el antiguo orden, cuyos herederos eran ahora los responsables de cuanto de negativo seguía dominando el panorama hispanoamericano. La noción, al parecer impuesta por la realidad misma, de que se habían producido en Hispanoamérica cambios sin duda diferentes, pero no menos decisivos que los previstos, si está muy presente en los que deben vivir y sufrir cotidianamente el nuevo orden hispanoamericano, no logra, sin embargo, penetrar en los esquemas ideológicos vigentes (salvo en figuras cuya creciente adhesión a un orden colonial imposible de resucitar condena a la marginalidad).

Sin embargo, los cambios ocurridos son impresionantes: no hay sector de la vida hispanoamericana que no haya sido tocado por la revolución. La más visible de las novedades es la violencia: como se ha visto ya, en la medida en que la revolución de las elites criollas urbanas no logra éxito inmediato, debe ampliarse progresivamente, mientras idéntico esfuerzo deben realizar quienes buscan aplastarla. En el Río de la Plata, en Venezuela, en México, y más limitadamente en Chile o Colombia, la movilización militar implica una previa movilización política, que se hace en condiciones demasiado angustiosas para disciplinar rigurosamente a los que convoca a la lucha. La guerra de Independencia, transformada en un complejo haz de guerras en las que hallan expresión tensiones raciales, regionales, grupales demasiado tiempo reprimidas, se transforma en el relato de «sangre y horror» del que los cronistas patriotas y realistas nos dan dos imágenes simétricamente mutiladas: la violencia popular anónima e incontrolable es invocada por unos y otros como responsable única de los errores, más caritativamente juzgados, de su propio bando. La explicación es incompleta; al lado de la violencia plebeya surge (en parte como imitación, más frecuentemente como reacción frente a ella) un nuevo estilo de acción de la elite criolla que en quince años de guerra saca de sí todo un cuerpo de oficiales: éstos, obligados a menudo a vivir y hacer vivir a sus soldados

del país –realista o patriota– que ocupan, terminan poseídos de un espíritu de cuerpo rápidamente consolidado y son a la vez un íncubo y un instrumento de poder para el sector que ha desencadenado la revolución y entiende seguir gobernándola. La altanería de los nuevos oficiales da lugar a quejumbrosos relatos desde Caracas hasta Buenos Aires: no sólo son periodistas juzgados insolentes los golpeados de modo afrentoso, sino a veces magistrados y eclesiásticos quienes sufren con la resignación necesaria ese mismo destino... Pero quienes sufren esas ofensas no dejan de utilizar a esos mismos jefes en la represión de las disidencias, sea las de signo realista (y en Pasto es la salvaje violencia patriótica la que mantiene en vida la guerrilla de los montañeses realistas), sea las que se dan en el frente revolucionario (y los ejércitos de Buenos Aires dejarán un recuerdo imborrable en la vecina y artiguista Santa Fe, donde incendian todo a su paso y donde altos oficiales porteños no juzgan por debajo de su dignidad arrebatar a golpes a los más ricos santafesinos un miserable botín de joyas devotas).

Esa violencia llega a dominar la vida cotidiana, y los que recuerdan los tiempos coloniales en que era posible recorrer sin peligro una Hispanoamérica casi vacía de hombres armados, tienden a tributar a los gobernantes españoles una admiración que renuncia de antemano a entender el secreto de su sabio régimen. El hecho es que eso no es ya posible: luego de la guerra es necesario difundir las armas por todas partes para mantener un orden interno tolerable; así la militarización sobrevive a la lucha.

Pero la militarización es un remedio a la vez costoso e inseguro: desde los generales que, como Monsieur Prudhomme, consagran su espada a defender la república o, si es necesario, a derrocarla, hasta los oficiales de guardias rurales –que no siempre dejan pasar la oportunidad de transformarse en bandidos, si la posibilidad de lucro es grande–, los jefes de grupos armados se independizan bien pronto de quienes los han invocado y organizado. Para conservar su favor, éstos deben tenerlos satisfechos: esto significa gastar en armas (y más aún en

el pago de quienes las llevan) lo mejor de las rentas del Estado. Las nuevas repúblicas llegan a la independencia con demasiado nutridos cuerpos de oficiales y no siempre se atreven a deshacerse de ellos. Pero para pagarlos tienen que recurrir a más violencia, como medio de obtener recursos de países a menudo arruinados, y con ello dependen cada vez más del exigente apoyo militar. Al lado de ese ejército, en los países que han hecho la guerra fuera de sus fronteras (es el caso de Argentina, y en parte de Venezuela, Nueva Granada, Chile) pesan más las milicias rústicas movilizadas para guardar el orden local; éstas, más cercanas a las estructuras regionales de poder y también menos costosas, comienzan a veces su ingreso en la lucha política expresando la protesta de las poblaciones agobiadas por el paso del ejército regular; a medida que se internan en esa lucha se hacen también ellas más costosas; ése es el precio de una organización más regular, sin la cual no podrían rivalizar con el ejército.

Los nuevos estados suelen entonces gastar más de lo que sus recursos permiten, y ello sobre todo porque es excepcional que el ejército consuma menos de la mitad de esos gastos. Lo que la situación tiene de anómalo es muy generalmente advertido; lo que tiene de inevitable, también. La imagen de una Hispanoamérica prisionera de los guardianes del orden (y a menudo causantes del desorden) comienza a difundirse; aunque no inexacta, requeriría ser matizada. Sólo en parte puede explicarse la hegemonía militar como un proceso que se alimenta a sí mismo, y su perduración como una consecuencia de la imposibilidad de que los inermes desarmen a los que tienen las armas. La gravitación de los cuerpos armados, surgida en el momento mismo en que se da una democratización, sin duda limitada pero real, de la vida política y social hispanoamericana, comienza sin duda por ser un aspecto de esa democratización, pero bien pronto se transforma en una garantía contra una extensión excesiva de ese proceso: por eso (y no sólo porque parece inevitable) aun quienes deploran algunas de las modalidades de la militarización hacen a veces poco por ponerle fin.

Esa democratización es otro de los cambios que la revolución ha traído consigo. Pero la palabra misma lo caracteriza muy inadecuadamente, y sólo se apreciará con justeza su alcance si se tiene constantemente presente, junto con la situación postrevolucionaria, la anterior al comienzo del proceso. Adecuado o no el término elegido para designarlos, basta, en efecto, un examen cuidadoso para advertir que los cambios ocurridos en este aspecto han sido importantes.

Ha cambiado la significación de la esclavitud: si bien los nuevos estados se muestran remisos a abolirla (prefieren soluciones de compromiso que incluyen la prohibición de la trata y la libertad de los futuros hijos de esclavas, innovaciones ambas de alcances inmediatos más limitados de lo que podría juzgarse), la guerra los obliga a manumisiones cada vez más amplias; las guerras civiles serán luego ocasión de otras... Esas manumisiones tienen por objeto conseguir soldados: aparte su objetivo inmediato, buscan en algún caso muy explícitamente salvar el equilibrio racial, asegurando que también los negros darán su cuota de muertos a la lucha: es el argumento dado alguna vez por Bolívar en favor de la medida, que encuentra la hostilidad de los dueños de esclavos. La esclavitud doméstica pierde importancia, la agrícola se defiende mejor en las zonas de plantaciones que dependen de ella: todavía en 1827 es lo bastante importante en Venezuela para suscitar la obstinada defensa de los terratenientes. Pero aun donde sobrevive la institución, la disciplina de la mano de obra esclava parece haber perdido buena parte de su eficacia: en Venezuela, como en la costa peruana, la productividad baja (en la segunda región catastróficamente); lo mismo ocurre en las zonas mineras de Nueva Granada, que habían utilizado mano de obra africana. Por otra parte, la reposición plantea problemas delicados: a largo plazo la esclavitud no puede en Hispanoamérica sobrevivir a la trata, y con las trabas puestas a ésta, el precio de los esclavos –allí donde se los utiliza en actividades productivas– sube rápidamente (en la costa peruana parece triplicar en el decenio posterior a la re-

volución). Antes de ser abolida (en casi toda Hispanoamérica hacia mediados del siglo) la institución de la esclavitud se vacía de su anterior importancia. Sin duda, los negros emancipados no serán reconocidos como iguales por la población blanca, ni aun por la mezclada, pero tienen un lugar profundamente cambiado en una sociedad que, si no es igualitaria, organiza sus desigualdades de manera diferente que la colonial.

La revolución ha cambiado también el sentido de la división en castas. Sin duda, apenas si ha tocado la situación de las masas indias de México, Guatemala y el macizo andino; en las zonas de densa población indígena, el estatuto particular de ésta tarda en desaparecer aún de los textos legales, y resiste aún mejor en los hechos. Ese conservatismo de la etapa inmediatamente posterior a la revolución implica también que las zonas indias donde sobrevive la comunidad agraria (que, todavía extensas en México, lo son mucho más en las tierras andinas) no son sustancialmente disminuidas por el avance de los hacendados, de los comerciantes y letrados urbanos que aspiran a conquistar tierras. Más bien que cualquier intención tutelar de las nuevas autoridades (que, por el contrario, en la mayor parte de los casos son por principio hostiles a la organización comunitaria) es la coyuntura la que defiende esa arcaica organización rural: el debilitamiento de los sectores altos urbanos, la falta –en las nuevas naciones de población indígena numerosa– de una expansión del consumo interno y, sobre todo, de la exportación agrícola, que haga inmediatamente codiciables las tierras indias, explican que éstas sigan en manos de comunidades labriegas atrozmente pobres, incapaces de defenderse contra fuertes presiones expropiadoras y además carentes a menudo de títulos escritos sobre sus tierras.

Frente al mantenimiento del estatuto real (y a menudo también del legal) de la población indígena, son los mestizos, los mulatos libres, en general los legalmente postergados en las sociedades urbanas o en las rurales de trabajo libre los que aprovechan mejor la transformación revolucionaria: aun cuando los censos de la primera etapa independiente siguen registrando la división en castas, la disminución a veces vertiginosa de los registrados como de sangre mezclada nos muestra de qué modo se reordena en este aspecto la sociedad postrevolucionaria.

Simultáneamente se ha dado otro cambio, facilitado por el debilitamiento del sistema de castas, pero no identificable con éste: ha variado la relación entre las elites urbanas prerrevolucionarias y los sectores, no sólo de castas (mulatos o mestizos urbanos) sino también de blancos pobres, desde los cuales había sido muy difícil el acceso a ellas. Ya la guerra, como se ha visto, creaba posibilidades nuevas, en las filas realistas aún más que en las revolucionarias: Iturbide, nacido en una familia de elite provinciana en México, y en Perú Santa Cruz, Castilla o Gamarra pudieron así alcanzar situaciones que antes les hubieran sido inaccesibles. Este proceso se da también allí donde la fuerza militar es expresión directa de los poderosos en la región (así, en Venezuela después de 1830, y en el Río de la Plata luego de 1820), pero aquí el cambio se vincula más bien que con la ampliación de los sectores dirigentes a partir de las viejas elites urbanas con otro desarrollo igualmente inducido por la revolución: la pérdida de poder de éstas frente a los sectores rurales.

La revolución, porque armaba vastas masas humanas, introducía un nuevo equilibrio de poder en que la fuerza del número contaba más que antes: necesariamente éste debía favorecer (antes que a la muy reducida población urbana) a la rural, en casi todas partes abrumadoramente mayoritaria. Y como consecuencia de ello, a los dirigentes prerrevolucionarios de la sociedad rural: al respecto, la atención concedida a los episodios revolucionarios más radicales puede llamar a error en la medida en que haga suponer que en el campo ocurrieron en esta etapa cambios radicales y duraderos del ordenamiento social. Por el contrario, en casi todas partes no había habido movimientos rurales espontáneos, y la jefatura seguía, por tanto, correspondiendo (en el nuevo orden políti-

co como en el viejo) a los propietarios o a sus agentes instalados al frente de las explotaciones; unos y otros solían dominar las milicias organizadas para asegurar el orden rural. Aun en algunas de las zonas que han conocido una radicalización marcada en la etapa revolucionaria esa hegemonía no desaparece: se mantiene, por ejemplo, en algunas del litoral argentino que siguen a Artigas. Lo que es más importante: los resultados de la radicalización revolucionaria son efímeros, en la medida en que ésta sólo preside la organización para la guerra; la reconversión a una economía de paz obliga a devolver poder a los terratenientes. En su Banda Oriental, deshecha por la guerra, Artigas (cuya preocupación por dar mejor lugar en el nuevo orden a los postergados del antiguo no puede discutirse) impone a todos los habitantes no propietarios de la campaña la obligación de llevar prueba de estar asalariados por un propietario, y pone así en manos de éstos la clave del nuevo orden rural. Sin duda, no puede hacer otra cosa si quiere que la economía de su provincia vuelva a ofrecer rápidamente saldos exportables, pero su decisión muestra muy bien de qué modo aun los jefes de los más radicales movimientos rurales debieron colaborar en la destrucción de su propia obra. Otros lo hicieron con celo aún más vivo desde que descubrieron las ventajas personales que podían derivar de dirigir la reconstrucción del orden social: en Venezuela los antiguos guerrilleros transformados en hacendados proporcionan el personal dirigente a la república conservadora.

Sin duda, la revolución no había pasado por esas tierras sin provocar bajas y nuevos ingresos en el grupo terrateniente; las ha provocado también en otras regiones de historia político-social menos agitada. Pero ha tenido otra consecuencia acaso más importante: es el entero sector terrateniente, al que el orden colonial había mantenido en posición subordinada, el que asciende en la sociedad postrevolucionaria. Frente a él las elites urbanas no sólo deben adaptarse a las consecuencias de ese ascenso: el curso del proceso revolucionario las ha perjudicado de modo más directo al hacerles sufrir los primeros embates de la represión revolucionaria o realista. Además la ha empobrecido: la guerra devora en primer término las fortunas muebles, tanto las privadas como las de las instituciones cuya riqueza, en principio colectiva, es gozada sobre todo por los hijos de la elite urbana: la Iglesia, los conventos, las corporaciones de comerciantes o mineros, donde las hay. Los consulados de comercio, por ejemplo, se transforman en intermediarios entre los comerciantes y un poder político de exigencias cada vez más exorbitantes, cuya agresiva mendicidad es temida por encima de todo. Sin duda, la guerra consume desenfrenadamente los ganados y frutos de las tierras que cruza; cuando se instala en una comarca puede dejar reducidos a sus habitantes al hambre crónica, que en algunos casos dura por años luego de la pacificación. Pero aun así deja intacta la semilla de una riqueza que podrá ser reconstituida: es la tierra, a partir de la cual las clases terratenientes podrán rehacer su fortuna tanto más fácilmente porque su peso político se ha hecho mayor.

Pero la revolución no priva solamente a las elites urbanas de una parte, por otra parte muy desigualmente distribuida, de su riqueza. Acaso sea más grave que despoje de poder y prestigio al sistema institucional con el que sus elites se identificaban, y que hubieran querido dominar solas, sin tener que compartirlo con los intrusos peninsulares favorecidos por la Corona. La victoria criolla tiene aquí un resultado paradójico: la lucha ha destruido lo que debía ser el premio de los vencedores. Los poderes revolucionarios no sólo han debido reemplazar el personal de las altas magistraturas, colocando en ellas a quienes les son leales; las ha privado de modo más permanente de poder y prestigio, transformándolas en agentes escasamente autónomos del centro de poder político. En las vacancias de éste, luego de 1825 no se verá ya a magistraturas municipales o judiciales llenar el primer plano como en el período 1808-10; la revolución ha traído para ellas una decadencia irremediable.

Un proceso análogo se da en la Iglesia: la colonial estaba muy vinculada a la Corona, y no se salva de la politización re-

volucionaria. Un jefe de la revolución de Buenos Aires señala las nuevas tareas del cuerpo eclesiástico: liberado de la opresión del antiguo régimen, debe poner su elocuencia al servicio del nuevo; quien no lo haga se revelará indigno de la libertad, y será privado de ella. No son amenazas vacías: la depuración de obispos y párrocos, expulsados, apresados, reemplazados por sacerdotes patriotas designados por el poder civil, transforma no sólo la composición del clero hispanoamericano, sino la relación entre éste y el poder político. Este cambio es espontáneo a la vez que inducido; los nuevos dirigentes de la Iglesia son a menudo apasionados patriotas, y no son sólo las consideraciones debidas al poder político del cual dependen las que los hacen figurar en primer término en las donaciones para los ejércitos revolucionarios, ofreciendo ornamentos preciosos y vasos sagrados, esclavos conventuales y ganados de las tierras eclesiásticas.

Así, la Iglesia se empobrece y se subordina al poder político; en algunas zonas el cambio es limitado y compensado por el nacimiento de un prestigio popular muy grande (así en México, en Guatemala, en Nueva Granada, en la sierra ecuatoriana). En otras partes esto no ocurre, y el proceso es agravado por las deserciones de curas y frailes; es el caso del Río de la Plata, donde sacerdotes conventuales, tras de laicizaciones que las autoridades eclesiásticas suelen conceder abundantemente, sobresalen desde Buenos Aires hasta el fondo de las provincias, en la política y en el ejército. En todo caso, el proceso no es frenado desde fuera: si la Iglesia colonial ha dividido sus lealtades entre Roma y Madrid, la revolucionaria ha quedado aislada a la vez de ambos centros. El Papa no reconoce otro soberano legítimo que el rey de España; los nuevos estados se proclaman herederos de las prerrogativas de éste en cuanto al gobierno de la Iglesia en Indias; el resultado es que administradores de sedes episcopales (ni el Vaticano ni los nuevos Gobiernos se atreven a nombrar obispos) y párrocos son designados –y a menudo removidos– por las autoridades políticas y con criterios políticos. Lo mismo que las dignidades

civiles, las eclesiásticas han perdido buena parte de las ventajas materiales que solían traer consigo; han perdido aún más en prestigio.

Debilitadas las bases económicas de su poder por el coste de la guerra (y por la rivalidad triunfante de los comerciantes extranjeros), despojados de las bases institucionales de su prestigio social, las elites urbanas deben aceptar ser integradas en posición muy subordinada en un nuevo orden político, cuyo núcleo es militar. Los más pobres dentro de esas elites hallan en esa adhesión rencorosa un camino para la supervivencia, poniendo las técnicas administrativas a menudo sumarias que son su único patrimonio supérstite al servicio del nuevo poder político; los que han salvado parte importante de su riqueza aprecian en la hegemonía militar su capacidad para mantener el orden interno, que aunque limitada y costosa es por el momento insustituible; se unen entonces en apoyo del orden establecido a los que han sabido prosperar en medio del cambio revolucionario: comerciantes extranjeros, generales transformados en terratenientes... La impopularidad que las nuevas modalidades políticas encuentran en la elite urbana, haya sido ésta realista o patriota, no impiden una cierta división de funciones en la que ésta acepta resignadamente la suya.

Esta división de funciones sigue imponiéndose todavía por otra razón. La revolución no ha suprimido un rasgo esencial de la realidad hispanoamericana, aunque ha cambiado algunos de los modos en que solía manifestarse; también luego de ella sigue siendo imprescindible el apoyo del poder político-administrativo para alcanzar y conservar la riqueza. En los sectores rurales se da una continuidad muy marcada: ahora como antes, la tierra se obtiene, no principalmente por dinero, sino por el favor del poder político, que es necesario conservar. En los urbanos la continuidad no excluye cambios más importantes: si en tiempos coloniales el favor por excelencia que se buscaba era la posibilidad de comerciar con ultramar, ésta ya no plantea serios problemas en tiempos postrevolucio-

narios. En cambio, la miseria del Estado crea en todas partes una nube de prestamistas a corto término, los agiotistas execrados de México a Buenos Aires, pero en todas partes utilizados: aparte los subidos intereses, las garantías increíbles (en medio de la guerra civil un Gobierno de Montevideo cedía desde las rentas de aduana hasta la propiedad de las plazas públicas de su capital para ganar la supervivencia, y a la vez la interesada adhesion de esos financistas aldeanos a su causa política), era la voluntaria ceguera del Gobierno frente a las hazañas de esos reyes del mercado lo que esos préstamos garantizaban. En uno y otro caso, la relación entre el poder político y los económicamente poderosos ha variado: el poderío social, expresable en términos de poder militar, de algunos hacendados, la relativa superioridad económica de los agiotistas los coloca en posición nueva frente a un estado al que no solicitan favores, sino imponen concesiones.

Esos cambios derivan, en parte, de que en Hispanoamérica hubo un ciclo de quince años de guerra revolucionaria. No fue ése, sin embargo, el único hecho importante de esos tres lustros: desde 1810 toda Hispanoamérica se abrió plenamente al comercio extranjero; la guerra se acompaña entonces de una brutal transformación de las estructuras mercantiles, que se da tanto en las zonas realistas como en las dominadas por los patriotas: si éstos han inscrito la libertad de comercio en sus banderas revolucionarias, sus adversarios dependen demasiado del favor inglés para poder hacer una política sustancialmente distinta, y terminan por abrir sus puertas al comercio extranjero, sea mediante concesiones abiertas, sea mediante autorizaciones limitadas multiplicadas en sus efectos por la indulgencia con que se las aplica.

He aquí un cambio esencial en la relación entre Hispanoamérica y el mundo; el contexto en que se dio explica en parte sus resultados: en la primera mitad del siglo XIX (salvo en los dos años afiebrados que precedieron al derrumbe de la bolsa de Londres en 1825), ni Inglaterra ni país europeo alguno realizaron apreciables inversiones de capitales en Hispanoamérica. La negativa a emprender esa aventura solía justificarse con altivas censuras al desorden postrevolucionario; esta explicación encontraba en Hispanoamérica un amplio eco, que mostraba cómo las relaciones con las nuevas metrópolis se apoyaban en una dependencia ideológica más sólida que la de la última etapa colonial. Pero si las insuficiencias del nuevo orden hispanoamericano eran tristemente evidentes, aun así la causa primera de esa negativa a intervenir a fondo en la reordenación de la economía hispanoamericana debía buscarse en la economía metropolitana misma. Aun los economistas más amigos de lo nuevo, al llegar al umbral de lo que debía ser un nuevo pacto colonial para Hispanoamérica, habían abundado en reservas frente a la temible fuerza –a la vez destructora y creadora– de la Europa que comenzaba su revolución industrial. Lo que esas reservas no habían previsto eran los desfallecimientos de esa fuerza, y eran precisamente éstos los decisivos: durante toda la primera mitad del siglo XIX Hispanoamérica entra en contacto con una Inglaterra, y secundariamente con una Europa, que sólo puede cubrir con dificultad los requerimientos de capital de la primera edad ferroviaria en el continente y en Estados Unidos.

Esa Inglaterra, esa Europa que quieren arriesgar poco en Hispanoamérica, sin duda porque el riesgo es grande, pero sobre todo porque les queda poco que arriesgar, buscan, en cambio, cosas muy precisas de la nueva relación que se ha abierto. Hasta mediados del siglo, salvo la excepción de las tierras atlánticas del azúcar, no son los frutos de la agricultura y la ganadería hispanoamericana los que interesan a los nuevos dueños del mercado; los de la minería, si más atractivos, no lo son tanto como para provocar las inversiones de capital necesarias para devolver su antigua productividad a las fuentes de metal precioso. Lo que se busca en Latinoamérica son sobre todo desemboques a la exportación metropolitana, y junto con ellos un dominio de los circuitos mercantiles locales que acentúe la situación favorable para la metrópoli. Hasta 1815, Inglaterra

vuelca sobre Latinoamérica un abigarrado desborde de su producción industrial; ya en ese año los mercados latinoamericanos están abarrotados, y el comienzo de la concurrencia continental y el agudizarse de la estadounidense invitan a los intereses británicos a un balance –muy pesimista– de esa primera etapa. Para los nuevos países que habían entrado en contacto directo con la Europa industrial en esos años decisivos, ese balance hubiera sido más matizado, pero tampoco le hubiese faltado una impresionante columna de pérdidas.

Pérdidas sobre todo para los que habían dominado las estructuras mercantiles coloniales. Éstos habían sido debilitados por la división entre un sector peninsular y uno criollo; el segundo, que había esperado prosperar con la ruina de su rival, se vio en cambio arrastrado por ella; era demasiado débil para resistir sólo a los conquistadores ultramarinos del mercado. Lo debilitaba aún más su vulnerabilidad a las presiones de un Estado indigente (los extranjeros –sobre todo los ingleses– estaban mejor protegidos por la necesidad de contar con la benevolencia de su Gobierno y por el temor a las represalias del poder naval). Pero lo debilitaba sobre todo el derrumbe de los circuitos comerciales en los que había prosperado: la ruta de Cádiz es cortada por la guerra y la revolución; a partir de 1814, el retorno de Europa continental al comercio mundial hace desaparecer las oportunidades ocasionalmente proporcionadas por economías coloniales antes aisladas de sus proveedores habituales. Y la nueva ruta dominante, la de Londres (luego de 1820, de Liverpool), concede todas las ventajas al rival ultramarino de los comerciantes criollos. Lo mismo en cuanto al transporte oceánico: la reconciliación con Inglaterra, si no eliminaba a los más aguerridos competidores de la marina mercante británica (es el caso de la norteamericana) aplastaba los esbozos de marinas locales que habían comenzado a darse en algunos puertos hispanoamericanos.

También en los circuitos internos de Hispanoamérica la guerra de Independencia introdujo innovaciones a las cuales

los debilitados grandes mercaderes locales no pudieron siempre adaptarse eficazmente: en toda la costa atlántica y en el Sur de la del Pacífico significó un paso más en la apertura directa al comercio ultramarino que había comenzado la reforma de 1778: Valparaíso, los puertos del sur de Perú y los del norte de México se transforman en centros de ese comercio; en ellos los agentes avanzados de la penetración mercantil británica triunfan con tanta mayor facilidad de posibles rivales locales por cuanto también para éstos el ambiente es extraño: derrotados en Buenos Aires, en Lima o en Veracruz, los comerciantes criollos de esos puertos encontrarían difícil desquitarse en Valparaíso, en Ilo o en Tampico... Esa derrota tiene efectos irreversibles: en toda Hispanoamérica, desde México a Buenos Aires, la parte más rica, la más prestigiosa, del comercio local quedará en manos extranjeras; luego de cincuenta años en Buenos Aires o Valparaíso, los apellidos ingleses abundarán en la aristocracia local. Aun fuera de los puertos la situación de los comerciantes extranjeros es privilegiada; en su viaje a México, al comienzo de la década del cuarenta, Fanny Calderón de la Barca podía notar cómo en todas partes las casas más ricas de los pueblos habían pasado a manos de comerciantes ingleses. Así la ruta de Liverpool reemplaza a la de Cádiz, y sus emisarios pasan a dominar el mercado como lo habían hecho los del puerto español. El cambio sin duda no se detiene aquí: el comercio de la nueva metrópoli es en muchos aspectos distinto del español. Nunca aparece más diferente que en sus comienzos: entre 1810 y 1815, los comerciantes ingleses buscan a la vez conquistar los mercados y colocar un excedente industrial cada vez más amplio. Son los años de las acciones audaces, cuando los mercaderes-aventureros rivalizan en la carrera hacia las comarcas que la guerra va abriendo, en las que quieren recoger «la crema del mercado». En esos años es destruida la estructura mercantil heredada; no serán siempre los productores quienes la añoren, pues los nuevos dueños del comercio introducen en los circuitos un circulante monetario que sus predecesores se

habían cuidado de difundir: de este modo la economía confirma a la política impulsando a la emancipación del productor rural frente al mercader y prestamista urbano.

Este proceso no va, sin embargo, muy lejos: luego de 1815 la relación así esbozada entra en crisis. Por una parte, la depresión metropolitana obliga a cuidar los precios a que se compran los frutos locales; por otra, la capacidad de consumo hispanoamericana, calculada con exceso de optimismo en los años pasados, ha sido colmada. Pero a la vez han aparecido competidores a los nuevos señores del mercado, y frente a la rivalidad norteamericana los ingleses comienzan a advertir qué debilidades se escondían bajo sus aparentes cartas de triunfo. Emisarios de una economía industrial que en parte ha financiado sus aventuras de conquista mercantil, su deber primero es volcar cantidades relativamente constantes de productos industriales (sobre todo textiles) en un mercado de capacidad de consumo muy variable. Abrumados por vastos *stocks,* se defienden mal de los navieros-comerciantes norteamericanos, que en barcos más pequeños trasladan *stocks* cuya composición pueden variar de acuerdo con las exigencias del mercado, puesto que sólo en mínima parte actúan como representantes de una industria necesitada de desemboques fijos. Frente a esos rivales, los británicos, tienden cada vez más a continuar las actitudes de los antiguos dominadores del mercado colonial latinoamericano; no es casual que, luego de 1825, se hagan abundantes las tomas de posición británicas sobre Hispanoamérica en que se hace amplia justicia al antiguo régimen.

En muchos aspectos Inglaterra es, en efecto, la heredera de España, beneficiaria de una situación de monopolio que puede ser sostenida ahora por medios más económicos que jurídicos, pero que se contenta de nuevo demasiado fácilmente con reservarse los mejores lucros de un tráfico mantenido dentro de niveles relativamente fijos. La Hispanoamérica que emerge en 1825 no es, sin embargo, igual a la anterior a 1810: en medio de la expansión del comercio ultramarino, ha aprendido a consumir más, en parte porque la manufactura

extranjera la provee mejor que la artesanía local (esos sarapes hechos en Glasgow al gusto mexicano, que son más baratos que los de Saltillo en el mismo Saltillo; esos ponchos hechos en Manchester al modo de la pampa, malos pero también baratos; la cuchillería «toledana» de Sheffield; el algodón ordinario de la Nueva Inglaterra que, antes que el británico, triunfa en los puertos sobre el de los obrajes del macizo andino). Pero al lado de esta conquista del mercado existente, estaba la creación de un mercado nuevo: los años de oferta superabundante llevaban a ventas de liquidación que si podían arruinar a toda una oleada de invasores comerciales, preparaban una clientela para quienes los seguirían. Sin duda, esa ampliación encontraba un límite en la escasa capacidad de consumo popular (un límite tanto más significativo por cuanto –contra lo que quieren tenaces prejuicios retrospectivos– buena parte de las nuevas importaciones son, en efecto, de consumo popular); la expansión de las de tejidos de algodón, que explica el mantenimiento del nivel total de las importaciones, se debe sobre todo al descenso secular del precio de esos tejidos.

Esa ofensiva industrial superó la resistencia de las artesanías locales, y toda una literatura nostálgica no se fatiga de evocar esa derrota, que fue, sin embargo, menos total y menos inmediata de lo que ella supone. Pero quizá su consecuencia más grave no fue ésa; el aumento de las importaciones, al parecer imposible de frenar (una política de prohibición no sólo era impopular, sino que privaba a los nuevos estados de las rentas aduaneras que, por presión de los terratenientes, se concentraban casi siempre en la importación y constituían la mayor parte de los ingresos públicos), significaba un peso muy grave para la economía en su conjunto, sobre todo cuando no se daba un aumento paralelo e igualmente rápido de las exportaciones. Las dificultades se presentaron aún más dramáticamente porque el interés principal de los nuevos dueños del mercado, como el de los anteriores, era obtener metálico y no frutos; ahora la fragmentación del antiguo imperio había separado a zonas enteras de sus fuentes de metal precioso (es el

caso del Río de la Plata, despojado en quince años de casi todo su circulante); aun en zonas que las habían conservado, el ritmo de la exportación, más rápido que el de producción, podía llevar al mismo resultado: así ocurría en Chile luego de la independencia; productor de plata y oro, el nuevo país no podía conservar la masa de moneda, sin embargo tan reducida, necesaria para los cambios internos.

Pero aun la exportación del circulante era insuficiente para equilibrar los déficits de la balanza comercial. En 1825, a propósito de Guayaquil, un cónsul británico se preguntaba cómo era posible un sistema por el cual, año tras año, el país importaba más de lo que exportaba. Aunque una parte del problema resulta de las valuaciones de aduana, en casi todas partes sistemáticamente bajas para los productos locales, éste está lejos de ser totalmente imaginario. Antes de la época de grandes inversiones, que fue la segunda mitad del siglo XIX, Hispanoamérica parece haber conocido una inversión extranjera menos fácilmente visible, la de una parte de las ganancias comerciales, que se traducía, por ejemplo, en algunas regiones en la compra de tierras por parte de comerciantes extranjeros. Pero esas inversiones no podían ser sino modestas, y por eso mismo el déficit comercial no podía exceder ciertos límites. Eso explica la lentitud con que crecen las importaciones, luego de que en los años revolucionarios se establece su nuevo nivel. Así la economía nos muestra una Hispanoamérica detenida, en la que la victoria (relativa) del productor –en términos sociales esto quiere decir en casi todos los casos del terrateniente– sobre el mercader se debe, sobre todo, a la decadencia de éste y no basta (salvo en ciertas situaciones estrictamente locales) para inducir un aumento de producción que el contacto más íntimo con la economía mundial no estimula en el grado que se había esperado hacia 1810; Hispanoamérica aparece entonces encerrada en un nuevo equilibrio, acaso más resueltamente estático que el colonial.

La parte que por acción y sobre todo por omisión tenía en el establecimiento de ese equilibrio la economía de las nuevas

metrópolis parece muy grande. Pero al lado de ella es preciso tomar en cuenta la que tuvo la política de las naciones que en Iberoamérica llenaban en parte el vacío dejado también en este aspecto por las viejas metrópolis. Desde el comienzo de su vida independiente, esta parte del planeta parecía ofrecer un campo privilegiado para la lucha entre nuevos aspirantes a la hegemonía. Esa lucha iba a darse, en efecto, pero –pese a las alarmas de algunos de sus agentes locales– la victoria siempre estuvo muy seguramente en manos británicas. Las más decididas tentativas de enfrentar esa hegemonía iban a estar a cargo de Estados Unidos –aproximadamente entre 1815 y 1830– y a partir de esa última fecha, de Francia.

El avance norteamericano se apoyaba en una penetración comercial que comenzó por ser exitosa: desde México a Lima y Buenos Aires, los informes consulares británicos recogidos por Humphreys denuncian, para años muy cercanos a 1825, la magnitud del peligro. Se apoyaba también en una orientación política aún más favorable que la de Gran Bretaña a la causa de los revolucionarios hispanoamericanos; intentó expresarse en el sostén a ciertas facciones revolucionarias (en general las menos moderadas): en Chile como en México, apoyando en un caso a los hermanos Carrera, en el otro a los yorkinos, los agentes consulares de la Unión enfrentaban a los sectores más conservadores, que contaban con el beneplácito británico. En su aspecto político la amenaza norteamericana se desvaneció bien pronto: los bandos que contaron con su simpatía enfrentaron rápidos fracasos; en todas partes –notaban con amargura los agentes norteamericanos– los favores de la diplomacia británica eran buscados ansiosamente y recibidos con agradecimiento, mientras que los de Estados Unidos encontraban una cortés indiferencia. En lo económico, la presencia norteamericana se desvaneció más lentamente: sostenida en un sistema mercantil extremadamente ágil, iba a perder buena parte de sus razones de superioridad cuando se rehiciera sólidamente una red de tráficos regulares; fue, sin embargo, el abaratamiento progresivo de los algodones de

Lancashire el que –al desalojar del mercado latinoamericano a los de Nueva Inglaterra, tanto más rústicos– hizo perder importancia al comercio norteamericano con Hispanoamérica.

La presencia francesa nunca significó un riesgo para el comercio británico: más que concurrente, el comercio francés era complementario del inglés, orientado como estaba hacia los productos de consumo de lujo y semilujo, y secundariamente hacia los de alimentación de origen mediterráneo, en los que Francia tendía a reemplazar a España. Pero el solo hecho de que una gran potencia continental tuviese relaciones más estrechas con Latinoamérica representaba un peligro. Fue la política francesa la que contribuyó a disiparlo: deseosa de afirmar su gravitación, la monarquía de Julio se hizo presente sobre todo a través de conflictos basados en reclamaciones en extremo discutibles; en México pudo salir con la suya en 1838; en el Río de la Plata iba a obtener, con mucho más esfuerzo, un éxito más limitado, pero tanto el éxito como el fracaso le enajenaban posibles simpatías hispanoamericanas; esa política agresiva y a la vez vacilante no ofrecía una alternativa válida a la más discreta hegemonía británica.

Éste es, en efecto, el dato dominante en la constelación internacional en que se mueve Latinoamérica. Afirmada vigorosamente durante la guerra de la Independencia (sobre todo en los años iniciales, en que el aislamiento respecto de la antigua metrópoli y de la entera Europa napoleónica –y junto con él la guerra anglonorteamericana– hacen de la Gran Bretaña el único poder externo que puede gravitar en la revolucionada Hispanoamérica, a la vez que la metrópoli efectiva de Brasil en que la corte portuguesa ha encontrado refugio) esa hegemonía se ha de consolidar en los años posteriores a 1815, en los que, sin embargo, no faltan tentativas de reconciliación de la Hispanoamérica revolucionaria y la Europa restaurada (ése es uno de los sentidos de los proyectos monárquicos). La intransigencia de España y la debilidad de las monarquías continentales los frustran; Gran Bretaña tiene ahora, como integrante

de pleno derecho de la Europa de la restauración, una situación envidiable; más que nunca los revolucionarios se disputan su buena voluntad, de la que depende su propia supervivencia. La diplomacia británica se deja adular y utiliza su posición para consolidar los intereses de sus súbditos, amenazados, luego de 1815, por una ola de impopularidad creciente. En la década siguiente va a consolidar aún más esa situación privilegiada, haciendo pagar el reconocimiento de la independencia de los muchos estados con tratados de amistad, comercio y navegación que recogen por entero sus aspiraciones. En ese momento la hegemonía de Inglaterra se apoya en su predominio comercial, en su poder naval, en tratados internacionales. Pero se apoya también en un uso muy discreto de esas ventajas: la potencia dominante, que protege mediante su poderío político una vinculación sobre todo mercantil y que no desea participar más profundamente en la economía latinoamericana, arriesgando capitales de los que no dispone en abundancia, se fija objetivos políticos adecuados a esa situación.

En primer lugar no aspira a una dominación política directa, que implicaría gastos administrativos y la comprometería en violentas luchas de facciones locales. Por el contrario, se propone dejar en manos hispanoamericanas, junto con la producción y buena parte del comercio interno, el costoso honor de gobernar esas vastas tierras. No quiere decir eso que no tenga también en este aspecto puntos de vista muy firmes, ni que se inhiba de hacer sentir su poder para imponerlos. Pero en cuanto a esto, hay que tener en cuenta ante todo que los esfuerzos británicos por imponer determinadas políticas serán siempre limitados: a falta de un rápido éxito suelen ser abandonados, dejando en situación a menudo incómoda a quienes creyeron contar incondicionalmente con el apoyo de Gran Bretaña. No hay que olvidar tampoco que las aspiraciones políticas de Gran Bretaña en Latinoamérica están definidas por el tipo de interés económico que la vincula con estas tierras. Su política es sólo muy ocasionalmente (en

algunos grandes conflictos) la de su cancillería de Londres; más frecuentemente es la de sus agentes, identificados con grupos de comerciantes que aspiran sobre todo a mantener expeditos los circuitos mercantiles que utilizan; en términos más generales, a mantener el *statu quo* si éste asegura razonablemente la paz y el orden interno. Salvo excepciones (cada vez más contadas a medida que se avanza en el tiempo), una extrema cautela es el rasgo dominante de una política así concebida.

Esta cautela explica la preferencia inglesa por el mantenimiento de la fragmentación política heredada de la revolución, que suele atribuirse al deseo de debilitar a los nuevos estados. Por el contrario, cada vez que una reorganización política en unidades más vastas pareció posible, ésta contó con el beneplácito británico, que no faltó ni a los proyectos de Bolívar ni a los menos ambiciosos protagonizados por Santa Cruz. Sin duda, frente al conflicto argentino-brasileño Inglaterra impuso en 1828 una solución que se apartaba de esta línea, creando un estado-tapón, y sus dirigentes no dejaron entonces de tomar en cuenta las ventajas que derivarían para sus intereses en el Río de la Plata, imposible desde entonces de clausurar por voluntad unilateral de una potencia. Pero al lado de estas consideraciones estaba la de que esa solución era la única que podía devolver rápidamente la paz y un comercio no perturbado al Atlántico sudamericano. Esta última consideración parecía ser, en todos los casos, la decisiva: si, contra lo que quieren reconstrucciones históricas demasiado fantasiosas, Inglaterra no tenía motivo para temer la creación de unidades políticas más vastas, que ofrecieran a su penetración comercial áreas más sólidamente pacificadas (y el ejemplo de Brasil muestra suficientemente que, en efecto, la relación de fuerzas le permitía encarar con serenidad las veleidades de política autónoma que podrían surgir en esas supuestas grandes potencias), tenía en cambio motivos sobrados para temer que esos proyectos fuesen irrealizables, que su último fruto fuese la anulación de los esfuerzos por imponer algún orden a

las unidades más pequeñas en que espontáneamente se había organizado la Hispanoamérica postrevolucionaria.

Esa política prudente explica que la hegemonía inglesa haya podido seguir consolidándose cuando algunas de sus bases comenzaban a flaquear: si a mediados de siglo el comercio y la navegación británicos siguen ocupando el primer lugar en Latinoamérica, están ya muy lejos de gozar del cuasi monopolio de los años posteriores a la revolución. Pero, pese a la multiplicación de conflictos locales, el influjo inglés, que en líneas generales no combate, sino apoya a los sectores a los que las muy variadas evoluciones locales han ido dando el predominio, es a la vez favorecido por éstos. Es en este sentido muy característica la diferencia que un gobernante gustoso de identificarse con la causa de América frente a las agresiones europeas, el argentino Juan Manuel de Rosas, establece entre las francesas –a las que responde con una resistencia obstinada, seguro de que la victoria será el premio de su paciencia– y las británicas, frente a las cuales busca discretamente soluciones conciliatorias, convencido como está de que a la postre Gran Bretaña descubrirá dónde están sus intereses en el Río de la Plata, y de que, por otra parte, no bastaría la resistencia más tenaz para borrar el influjo británico de esa comarca. El mismo deseo de esquivar una ruptura total se manifiesta en Brasil, cuyos dirigentes resistieron, sin embargo, con tenacidad sin igual las pretensiones británicas en torno a la supresión de la trata de negros: a lo largo de conflictos que se prolongaron durante decenios y que llevaron en algún momento a la interrupción de relaciones diplomáticas, el abandono de la órbita británica seguía siendo, para los dirigentes brasileños, un proyecto imposible.

Su fuerza y el uso moderado que de ella hace contribuyen a hacer de Inglaterra la potencia dominante; a mediados del siglo XIX parece surgir en el horizonte latinoamericano el influjo de otra: es de nuevo Estados Unidos, cuya huella queda inscrita en la guerra mexicano-norteamericana, y más discretamente en el breve florecer del anexionismo cubano, y cuyo

nuevo papel parece reconocido por Gran Bretaña (por lo menos para la América Central) en el tratado de 1850, que prevé una solución concertada para el problema del canal interoceánico. Pero el sentido de la presencia norteamericana es doble. Hay, por un lado, la voluntad de expansión territorial de regiones consagradas a una economía agraria, divididas entre sí por el problema del trabajo servil; en particular, el sur esclavista debe expandirse o perecer, y la guerra de México es su triunfo, como la anexión de Cuba es su proyecto. En ese aspecto la presencia norteamericana se traduce pura y simplemente en un avance sobre la frontera de las tierras iberoamericanas. Hay también el esbozo de una relación nueva, que no por casualidad se da en esa América Central, a la que el descubrimiento del oro californiano transforma en eje de las comunicaciones de la ampliada área económica; en este aspecto la presión estadounidense (destinada a disminuir temporariamente al completarse la red ferroviaria entre el Atlántico y el Pacífico) anuncia, pero todavía de lejos, un futuro que sólo ha de madurar a comienzos del siglo XX, en un marco muy distinto del que encierra a Latinoamérica entre la emancipación y los años centrales del siglo XIX.

Este marco es, por el momento, muy rígido; los datos de la realidad hispanoamericana y los de la economía metropolitana coinciden en provocar una estabilidad en la penuria, muy distinta de las renovaciones esperadas en la aurora de la revolución; la nueva potencia dominante, al tomar en cuenta esa situación e introducirla como postulado esencial de su política, contribuye a consolidarla. Mientras tanto Hispanoamérica espera, cada vez con menores esperanzas, el cambio que no llega. Hacia la década del cuarenta, definitivamente alejada la posibilidad de una restauración del antiguo orden, la nostalgia de sus blandas excelencias puede ser reconocida por conservadores e innovadores a la vez como un sentimiento muy arraigado en la opinión hispanoamericana. Es que entre los cambios traídos por la independencia es fácil sobre todo advertir los negativos: degradación de la vida administrativa,

desorden y militarización, un despotismo más pesado de soportar porque debe ejercerse sobre poblaciones que la revolución ha despertado a la vida política, y que sólo deja la alternativa, a la vez temible e ilusoria, de la guerra civil, incapaz de fundar sistemas de convivencia menos brutales. En lo económico, desde una perspectiva general hispanoamericana, se da un estancamiento al parecer invencible: en casi todas partes los niveles de comercio internacional de 1850 no exceden demasiado a los de 1810; este indicador, particularmente sensible a cambios inducidos a partir del contacto con el resto del mundo, lo dice casi todo. Pero esa situación general conoce variaciones locales muy importantes, que se relacionan, más bien que con la diferente intensidad del desorden intenso, con las características –esbozadas ya antes de 1810– de las distintas economías regionales. Venezuela, que ha combatido reiterada y ferozmente su guerra de Independencia en su propio territorio, o el Río de la Plata, que la ha combatido fuera de él, pero ha conocido luego guerras civiles, bloqueos internacionales y largas etapas de desorden, logran retomar y superar los niveles de los más prósperos años coloniales; Venezuela en su agricultura, y el Río de la Plata en su ganadería tienen, desde antes de 1810, el germen de una estructura económica orientada a ultramar, que compensará las desventajas del nuevo clima político-social con las ventajas que le aporta la nueva organización comercial, y así podrá afirmarse. En cambio Bolivia, Perú y sobre todo México, cuya economía minera ha sufrido de muchas maneras el impacto de la crisis revolucionaria, y requeriría aportes de capitales ultramarinos para ser rehabilitada, no logran reconquistar su nivel de tiempos coloniales: la producción mexicana de plata desciende a la mitad de la cifra alcanzada en las últimas décadas coloniales; en 1810 el virreinato de México exportaba por valor cinco veces mayor que el del Río de la Plata, y a mediados de siglo ambas exportaciones se han nivelado, aunque ya no salen de Buenos Aires los retornos de plata altoperuana; comparación todavía más impresionante: en cuarenta años la riqueza ganadera de

la pampa rioplatense, que antes de 1810 había sostenido exportaciones por valor del 4 por 100 de las de plata mexicana, está cerca de igualarse con ellas: ha decuplicado su valor, mientras el de ésta –como se ha señalado– se ha reducido a la mitad.

Entre estos casos extremos se sitúa la mayor parte de las regiones hispanoamericanas, cuya evolución es menos rica en altibajos. En algunas de ellas hemos de ver reproducirse, en escala reducida, los contrastes que se acaban de descubrir para Hispanoamérica. Así, en América Central ese admirable observador que fue Stephens pudo encontrar en casi todas partes una economía a la que la falta de desemboques para su producción y la falta de capitales para acrecerla hacían estática: en Honduras, en Nicaragua, en el litoral costarricense del Pacífico, hacendados dueños de tierras vastas como provincias europeas vivían en la escasez sobre esas riquezas ilusorias, que era imposible explotar adecuadamente. Pero en la meseta central de Costa Rica pudo ver el comienzo de la expansión del café; propietarios a los que sus vecinos vaticinaban próxima ruina utilizaban las ganancias de cosechas anteriores, instaladas en Europa, para plantar más y más cafetales, y lejos de arruinarse se encontraban cada vez más ricos: ese diminuto rincón centroamericano había encontrado –como el Río de la Plata o Venezuela– la nueva fórmula de prosperidad, en una economía exportadora ligada al mercado ultramarino. En otras partes el mismo proceso se da de modo más lento: es el caso de Nueva Granada, donde el aumento de las exportaciones de cueros (fruto de la ganadería de la sabana) llena, en parte, la brecha abierta por la crisis de la minería; es más acentuadamente el caso de Chile, que –habiendo obtenido en el reajuste del comercio hispanoamericano acceso directo al mercado metropolitano– también completa con exportaciones de cueros las derivadas de una minería que, desde 1830, retoma su ritmo ascendente y que ha agregado a los metales preciosos el cobre (que ya desde mediados de la década del veinte supera en valor a plata y oro sumados y sólo será devuelto a segundo plano por la expansión de la plata de la década siguiente). Es entonces la Hispanoamérica marginal, la que en tiempos coloniales estaba en segundo plano, y sólo comenzaba a despertar luego de 1780, la que resiste mejor las crisis brutales del período de emancipación; junto con el Río de la Plata, Venezuela, Chile, Costa Rica, también las islas antillanas, que han permanecido bajo dominio español, prosiguen su avance económico; sobre todo Cuba, beneficiada por la crisis que la emancipación de los esclavos produce en la economía azucarera de las Antillas inglesas (y por el liberalismo comercial que España aplica a lo que resta de su imperio, para salvarlo de la agresividad de las potencias económicamente dominantes), expande su producción de azúcar; entre 1815 y 1850 el volumen de las exportaciones azucareras cubanas más que cuadruplica (pasando de algo más de 40.000 toneladas a las 200.000) y su valor más que duplica.

Junto con esa Hispanoamérica dinámica, que se superpone casi totalmente con que ha comenzado a expandirse en la segunda mitad del siglo XVIII, también Brasil supera sin dificultades económicas inmediatas la crisis de independencia: del mismo modo que en Cuba también aquí la crisis azucarera de las West Indies significa un estímulo inmediato: el nordeste azucarero conoce un retorno de prosperidad; al mismo tiempo, el extremo sur ganadero repite, en tono menor, la expansión de su vecino meridional, el Río de la Plata. Ese crecimiento en los extremos crea desequilibrios que han de repercutir en la vida política brasileña; si el imperio logra sobrevivir, el Brasil independiente sólo adquirirá una cierta cohesión cuando el café vuelva a colocar al centro del país en el núcleo de su economía. Esos desequilibrios están agravados porque el renacido nordeste azucarero conserva todo su arcaísmo: como antes, depende para sobrevivir de una mano de obra esclava que sólo la importación puede mantener en nivel adecuado (puesto que, al revés de lo que ocurre en el Sur norteamericano, el Brasil del azúcar no es capaz de producir internamente los esclavos que llenen los huecos creados por la muerte en la

fuerza de trabajo disponible). Bajo el predominio del norte azucarero, Brasil debe sostener una lucha tenaz, pero de resultado necesariamente negativo, con una Inglaterra dispuesta a abolir la trata: aunque en la primera mitad del siglo XIX las importaciones de esclavos africanos son mayores que en cualquier época anterior, la crisis del sistema se avecina inexorablemente. Al mismo tiempo, absorbido en la defensa de su economía esclavista, Brasil cede paulatinamente en los otros puntos de conflicto con la potencia hegemónica: el tratado de 1827 reiteraba sustancialmente los términos del arrancado a Portugal en 1810; apertura del mercado brasileño a la importación británica, sin defensa para ningún rubro de producción local; mantenimiento de jurisdicciones especiales para los británicos residentes en Brasil... Pese a todo ello, a partir de 1845 Gran Bretaña pasa a reprimir la trata por la violencia; sólo cuando se resigna a eliminarla, Brasil recupera la posibilidad de una política en otros aspectos más independiente de la tutela británica. Entretanto, se ha constituido en el principal mercado latinoamericano para Gran Bretaña; sus importaciones alcanzan bien pronto el nivel de los cuatro millones de libras anuales (cuatro veces las del Río de la Plata). Los resultados son los esperables: déficit comercial, desaparición del circulante metálico, penuria de las finanzas (agravada porque tampoco en el Brasil imperial, pese a la levedad de la crisis de independencia, mantener el orden interno es empresa sencilla).

Para esa situación inesperadamente dura, América latina fue elaborando soluciones (de política económico-financiera; de política general) que sólo lentamente iban a madurar. Allí donde la crisis fue, a pesar de todo, menos honda, las soluciones fueron halladas más pronto, y significaron transformaciones menos profundas. Ninguna adaptación al nuevo orden de cosas fue en ambos aspectos más exitosa que la brasileña; y el imperio terminó por ser, para la republicana América española, un algo escandaloso término de comparación sobre el

cual podía medir su propio fracaso. Ese éxito tenía algunos secretos: el viejo orden era en **Brasil** más parecido al nuevo que en Hispanoamérica; una metrópoli menos vigorosa, y por lo tanto menos capaz de hacer sentir su gravitación; un contacto ya entonces directo con la nueva metrópoli económica, un peso menor de los agentes de la Corona respecto de poderes económico-sociales de raíz local acostumbrados a imponerse, eran todos rasgos que en el Brasil colonial anticipaban el orden independiente. Las transformaciones eran sin embargo, indudables, y la transición difícil. La creación de un parlamento tenía, de modo menos violento, consecuencias comparables a la militarización de Hispanoamérica: en él las clases terratenientes de un país abrumadoramente rural debían predominar, y para evitarlo, la Corona debía emplear de modo muy discutible sus poderes. Un liberalismo brasileño, vocero sobre todo de las distintas aristocracias locales (la azucarera del norte, las ganaderas del centro y del extremo sur) choca con un conservadurismo urbano, comprometido por la presencia en sus filas de los portugueses que dominan el pequeño y mediano comercio de los puertos y representado sobre todo por funcionarios herederos de la mentalidad –a menudo más esclarecida que la de sus rivales los grandes señores liberales– del antiguo régimen. Sin duda, entre esos adversarios el equilibrio era posible: misión de la Corona era asegurar con su influjo algún poder al sector conservador y, a la vez, arbitrar entre ambos. Para ello contaba básicamente con el apoyo del ejército, sólo lentamente nacionalizado y mezclado –no por casualidad– de cuerpos mercenarios europeos.

Aun así, su tarea no era fácil: el emperador Pedro I iba a fracasar sustancialmente en ella; terminó por quedar identificado con los sectores que en el nuevo Brasil mantenían la nostalgia del absolutismo y de la unión con Portugal. Antes había tenido tiempo de lanzar al imperio a la primera de sus aventuras internacionales: la guerra del Río de la Plata por la posesión de la Banda Oriental, rebautizada Provincia Cisplatina e incorporada como tal al imperio brasileño, luego de haber

sido ocupada, a partir de 1816, por tropas portuguesas. La guerra –fruto de una rebelión de la población local, que obligó al Gobierno de Buenos Aires a apoyarla luego de ganar el control de la mayor parte del territorio disputado– provocó una alineación de fuerzas sólo aparentemente paradójica. Si la Corona, apoyada en el ejército y mal arraigada en el país, deseosa por lo tanto de evitar una humillación internacional que podía serle fatal, quería una lucha conducida hasta la victoria, su belicismo encontraba eco muy limitado en los sectores conservadores; en cambio los liberales (sobre todo los del Sur) adoptaban con entusiasmo una política que satisfacía sus intereses regionales (representados muy concretamente por los hacendados riograndenses que estaban haciéndose dueños de tanta parte de la campaña del Uruguay). He aquí una secuencia que aún ha de repetirse: la Corona tenderá a encontrar un terreno de acuerdo con fracciones liberales, en una política exterior más aventurera que la deseada por los sectores urbanos, que apoyan habitualmente a los conservadores.

En todo caso la guerra no es un éxito; derrotado por tierra, Brasil ahoga económicamente a su enemigo mediante el bloqueo de Buenos Aires; debe finalmente aceptar la mediación inglesa y la solución que Gran Bretaña ha propuesto desde el comienzo: la independencia de la Banda Oriental, que desde 1828 se constituye en nuevo estado republicano. Entretanto, Brasil, necesitado de la buena voluntad británica, ha hecho concesiones sustanciales en los tratados de 1825 y 1827, sobre trata negrera y comercio y navegación. Entretanto, también, la guerra le ha permitido descubrir un instrumento financiero que, censurado enérgicamente por todos, y contrario a las buenas doctrinas económicas, se revela, sin embargo, indispensable: el papel moneda. En la inflación se descubre la solución conjunta para los problemas de un estado en perpetua miseria y los de una economía en perpetuo déficit de intercambio: entre 1822 y 1846 el milreis pierde la mitad de su valor, pasando de 61,50 a 27 peniques; las consecuencias del proceso se agravan porque se da en clima caótico, con multiplicación de bancos de emisión, creación de nuevas monedas metálicas de valor inferior al declarado, y clandestinamente empobrecidas aun más por el Gobierno que las acuna, falsificaciones frecuentes... Pese a todo ello, la inflación permite eludir crisis aun más graves. En otro aspecto, su adopción es significativa: marca el triunfo de los intereses rurales sobre los urbanos; entre los primeros son, sobre todo, los terratenientes del Norte y del Sur, dependientes del mercado internacional, los más favorecidos; entre los segundos es aún más perjudicada que los comerciantes la masa de asalariados (la clase media, que en el imperio esclavista es más nutrida que la clase baja libre). El descontento urbano, que enfrenta el duro orden conservador mantenido por el imperio, adquiere signo liberal; capaz de buscar salida subversiva, será un nuevo instrumento de extorsión en manos del liberalismo más moderado de base rural.

Así las cosas, no es extraño que la vida política del imperio haya sido agitada. En 1831 don Pedro I decide trasladarse a Portugal, a luchar contra la rebelión absolutista de don Miguel y asegurar la sucesión para su hija María de la Gloria. Su retiro es una implícita confesión de fracaso, y marca el comienzo del imperio parlamentario. Los alcances de la innovación son limitados por el hecho de que si el gabinete requiere el apoyo de la mayoría parlamentaria, es a la vez capaz –contando con el apoyo de la Corona– de conquistar esa mayoría en elecciones suficientemente dirigidas. Pero es indiscutible que el nuevo orden da lugar más importante al liberalismo; la reforma de la carta daba en 1832 mayor autonomía a las provincias, y ese esbozo de federalismo era aún más favorable al partido antes opositor que el parlamentarismo. Entre 1831 y 1840 la regencia iba a intentar frenar el proceso centrífugo, mientras enfrentaba alzamientos disidentes en el Norte y el Sur (desde 1835 Río Grande do Sul está en guerra civil, conmovido por un alzamiento republicano). Pero –rasgo muy notable del orden político brasileño– el liberalismo puede ser alternativamente revolucionario y constitucional; sus adver-

sarios prefieren no obligarlo a renunciar a sus ambigüedades, temerosos de terminar con la unidad brasileña. En 1840, la declaración de mayoría de don Pedro I, entonces de quince años, significó un triunfo liberal, bien pronto anulado por la voluntad del monarca de asegurarse un papel de árbitro en el ritmo de alternancia de los partidos.

En 1845 era vencida la revolución riograndense, y sus jefes entraban a ocupar lugares importantes en el orden imperial restaurado; en 1848 una revolución nordestina, esencialmente urbana, era fácilmente sofocada. Desde entonces la fuerza de las cosas mismas, y la acción tenaz de la Corona, iban a destruir la rivalidad (y junto con ella la cohesión interna) de los partidos: vocero de fuerzas locales, que una vez tutelados sus intereses inmediatos eran indiferentes a la gran política, el parlamento iba a proporcionar apoyo a una elite de políticos formados en él, pero deudores del poder a la Corona y al ejército, al que las guerras civiles de la década del cuarenta habían dado una fuerza nueva en el panorama interno.

Esa atenuación de los conflictos políticos, si no significaba necesariamente un triunfo del liberalismo, implicaba, en cambio, el de los sectores sociales que habían comenzado por identificarse con éste. Había sido facilitada porque, en las décadas agitadas de 1830 y 1840, esos sectores y sus rivales habían encontrado un terreno de unión en la resistencia a la supresión de la trata. El mantenimiento de ésta era esencial para la economía azucarera del norte y del litoral del centro; el comienzo de la expansión del café (que se insinuaba en Río de Janeiro antes de encontrar su tierra de elección en San Pablo) también se apoyaba en el trabajo esclavo. Al mismo tiempo, el comercio de esclavos, al que la persecución británica hacía a la vez más azaroso y más lucrativo, ofrecía un oportuno desquite a los comerciantes portugueses de las ciudades litorales, marginados del gran comercio europeo por los británicos. Pero hacia fines de la década del cuarenta, esta comunidad de intereses comenzó a quebrarse: si la persecución creciente de la trata hacía al comercio de esclavos aún más lucrativo, ponía

a la vez en crisis a la agricultura que utilizaba esa mano de obra cada vez más costosa; esa creciente divergencia de destinos e intereses puso fin a la mansa rebelión de los parlamentarios contra sus líderes que –conservadores o liberales– coincidían en pedir medidas eficaces contra la trata; éstas llegaron finalmente en 1851. En 1840 el senador paulista Vergueiro había comenzado a explotar tierras de café utilizando colonos libres, a los que reconocía la mitad del fruto de la cosecha; el centro de Brasil comenzaba así a explorar un nuevo camino, y aun el norte azucarero debía buscarlo para sobrevivir, puesto que la agricultura esclavista se estaba haciendo económicamente imposible.

El núcleo de Brasil comienza a apartarse de nuevo del nordeste azucarero; la reconciliación en una síntesis política en que el liberalismo es cada vez más el elemento dominante, se traduce en una nueva concesión a las fuerzas regionales del Sur. Vuelto desde 1845 al escenario rioplatense, gracias al fin de la secesión riograndense, Brasil intenta orientar el dinamismo de los dirigentes del extremo sur hacia metas de expansión y no de secesión. Desde 1851, en alianza con el Gobierno uruguayo encerrado en Montevideo y con los gobernadores disidentes de las provincias argentinas de Entre Ríos y Corrientes, organiza una campaña que, a comienzos de 1852, logra derribar a Rosas, gobernador de Buenos Aires y figura dominante del panorama rioplatense. Desde entonces hasta 1870, el imperio volverá a tener participación muy activa en los asuntos de los vecinos del Sur; si a la postre los frutos de su acción se revelarán muy magros, haberla emprendido revela ya el vigor alcanzado por el Brasil imperial a mediados del siglo XIX; aunque la expansión de su economía ha sido relativamente lenta (las exportaciones han pasado, entre la tercera y la quinta década del siglo, de un promedio anual de casi cuatro millones de esterlinas a uno de casi cinco millones y medio; en el mismo plazo las importaciones han subido de algo más de cuatro millones a seis millones), más lenta por cierto que la de la población (casi cuatro millones, de los cua-

les algo más de un millón de esclavos, en 1825; ocho millones, de los cuales dos millones y medio de esclavos, en 1850), hay, sin embargo, en ella ciertos avances que, junto con la estabilidad política, explican el prestigio que el Brasil imperial conquista en Hispanoamérica. Ese Brasil ha sido la base primera de la penetración comercial europea hacia el Río de la Plata y Chile; se esboza a partir de 1810 el surgimiento de una metrópoli secundaria, destinada sin embargo a no madurar; en todo caso, hasta veinte años después de 1810 Río de Janeiro hace, frente a Buenos Aires y Valparaíso, papel de mercado de distribución. Junto con el mayor volumen comercial se da alguna mayor madurez en la estructura financiera: Brasil tiene un sistema bancario antes de que sus vecinos hispánicos lo puedan tener de modo estable; y luego de 1851, junto con los hacendados riograndenses, es el mayor banquero de Río de Janeiro, el barón y luego vizconde de Mauá, quien extiende sus actividades (sólo nominalmente independientes respecto del centro financiero de Londres) hacia Uruguay y Argentina. Esos avances, como los de la política brasileña, serán efímeros, pero por el momento parecen confirmar la superioridad de la solución neoportuguesa frente a la neoespañola, luego de la crisis de la emancipación. Frente al éxito imperial -por limitado que se quiera- Hispanoamérica parece no poder exhibir sino un balance en que los fracasos predominan abrumadoramente.

El inventario de esos fracasos se ha hecho muchas veces; la primera consecuencia de ellos suele buscarse en la fragmentación política de Hispanoamérica, que se contrapone a la unión de la América portuguesa, salvada a pesar de la crisis que abundaron en el siglo XIX brasileño. Pero esta conclusión es muy discutible: baste observar que la estructura colonial portuguesa había creado un Brasil unido, y la española había ya dividido a las Indias en muy variadas jurisdicciones administrativas. Esa diferente organización colonial refleja a su modo datos que le son previos: Brasil era gobernado todo él por un solo virrey porque podía serlo, pese a la sumaria organización administrativa portuguesa; gobernar desde un sólo centro las tierras que van desde California a Buenos Aires era demasiado evidentemente imposible. La guerra de Independencia había confirmado las divisiones internas de la Hispanoamérica colonial, y había creado otras: fueron sus vicisitudes las que hicieron estallar la unidad -por otra parte tan reciente- del virreinato del Río de la Plata. Sólo en América Central el proceso de fragmentación iba a proseguir luego de 1825, con la disolución de las Provincias Unidas de Centroamérica en 1841 y con la separación de Panamá de Colombia, producida en un contexto muy diferente y ya en el siglo XX. Más que de la fragmentación de Hispanoamérica habría entonces que hablar, para el período posterior a la independencia, de la incapacidad de superarla. Esta incapacidad se pone de manifiesto a través del fracaso de las tentativas de reorganización que intentan evadirse del marco estrecho de los nuevos estados, herederos del marco territorial de los viejos virreinatos, presidencias y capitanías: la más importante es, desde luego, la de Bolívar.

Pero ésta implica algo más que un intento de agrupar en un sistema político coherente a Hispanoamérica en torno de Colombia; es a la vez una tentativa de equilibrar los aportes revolucionarios y los del viejo orden, en la que se refleja el pensamiento de Bolívar frente a la realidad postrevolucionaria. El Libertador seguía siendo hostil a la monarquía; a la aversión de principio se agregaba ahora, luego del derrumbe del poder napoleónico, la seguridad de que -como decía con vocabulario maquiavélico- «no hay poder más difícil de mantener que el de un príncipe nuevo». El fracaso de Napoleón le interesaba, además, porque veía en la «liga de los republicanos y los aristócratas» que lo había enfrentado una prefiguración de las resistencias que él debía enfrentar desde Caracas hasta Potosí. En particular por los que llamaba jacobinos (secuaces demasiado consecuentes de ideologías a menudo más moderadas que las de la montaña) iba a profesar una aversión destinada a no desarmarse, que recordaba la de su reticentemente admira-

do modelo por los ideólogos: a las tendencias utópicas de éstos contraponía Bolívar su propio realismo, duramente aprendido a lo largo de su carrera de revolucionario. Pero si ese realismo se manifestaba en diagnósticos muy precisos y lúcidos de los problemas hispanoamericanos, las soluciones, buscadas a tientas, no siempre parecían mucho más practicables que la de los republicanos intransigentes; también las repúblicas que Bolívar organizó podrían llamarse, como él llamó burlonamente a las sonadas por sus rivales, «repúblicas aéreas».

En lo político, la solución la encontraba Bolívar en la república autoritaria, con presidente vitalicio y cuerpo electoral reducido; al asegurar un estable predominio a las elites de raíz prerrevolucionaria, ese régimen encontraría, según Bolívar, modo de arraigar en Hispanoamérica. Sobre esas líneas organizó a la república de Bolivia, que le rogó se transformase en su Licurgo; la constitución boliviana fue introducida en 1826 en Perú, en reemplazo de la excesivamente liberal de 1823; como ya era esperable, fue Bolívar el primer presidente vitalicio de Perú. Ese mismo año volvía a Colombia, en la que Páez había levantado a la sección venezolana. Reconciliado con el caudillo llanero, se halló cada vez más distante de Santander, que en su ausencia había intentado sofocar el alzamiento venezolano. Por otra parte, la constitución de Cúcuta, vestigio de una etapa remota de la revolución hispanoamericana, ya no le satisfacía; la convención de Ocaña, convocada para reformarla, incluía, sin embargo, demasiados adversarios del autoritarismo bolivariano, y sus adictos prefirieron retirarse de ella. Entretanto la ruptura entre Bolívar y Santander se había tornado total; el primero achacaba al segundo participar en conspiraciones, el segundo adoptaba progresivamente la posición de defensor intransigente de la legalidad republicana, que en el pasado lo había encontrado menos entusiasta. Finalmente, un pronunciamiento de altos funcionarios y militares dio todos los poderes en Colombia a Bolívar, que los aceptó; unos meses después salvó casi milagrosamente la vida de un atentado organizado por la oposición bogotana.

Mientras tanto su predominio en el Sur se derrumbaba; en Bolivia y en Perú se le identificaba con la presencia de las tropas colombianas, que por su parte estaban fatigadas de su papel de guardianes del orden nuevo en tierras tan remotas. Fueron éstas las que, alzándose en Lima, pusieron fin al régimen vitalicio en Perú; una comisión de vecinos declaró restaurada la constitución de 1823, meses después una constituyente haría presidente de Perú al general Lamar, militar de carrera y realista hasta 1821, que estaba destinado a ser el ejecutor dócil de las voluntades de la mayoría parlamentaria, en que volvían a encontrarse los sobrevivientes de la elite limeña. En Bolivia la posición de Sucre –presidente vitalicio– se debilitó inmediatamente; una revolución que recibió incitaciones de Perú, y en la que participaron algunos de sus subordinados, lo eliminó del poder; un ejército peruano, al mando del general Gamarra (otro antiguo jefe realista), se introdujo en Bolivia para consolidar la victoria sobre el influjo colombiano.

El desenlace fue una guerra entre Perú y Colombia; uno y otro de los adversarios estaban debilitados por la discordia interna (que socavó la organización del ejercito peruano). Luego de unos meses de guerra, y algunas victorias escasamente decisivas de los colombianos, Lamar era derrocado y reemplazado por Gamarra, que contaba con el apoyo del presidente de Bolivia, Santa Cruz, otro de los militares mestizos que, formados en las filas realistas, habían pasado luego a las revolucionarias. Gamarra hizo la paz con Colombia, renunciando a toda pretensión peruana sobre Guayaquil; el sistema bolivariano había perdido así su entero sector meridional. La misma Colombia no sobrevivió al esfuerzo exigido por la guerra peruana: en 1830 Venezuela y Quito volvían a separarse, la primera bajo el comando de Páez, la segunda bajo el de Flores, hasta entonces general leal a Bolívar. El Libertador abandonó el poder, para morir meses después en Santa Marta, de tuberculosis y desesperación. Según su desolada conclusión, querer construir algo en Hispanoamérica había sido como arar en el mar. Sucre, el más fiel de sus secuaces, que un año antes ha-

bía sido asesinado en una celada, había dicho ya lo mismo cuando aún su jefe seguía planeando nuevas construcciones políticas: todas ellas estaban condenadas de antemano, porque los cimientos eran necesariamente de arena y barro...

Esas conclusiones amargas coronan un esfuerzo a la vez grandioso y muy atento a las limitaciones de la realidad. En efecto, Bolívar se había ya desengañado de la posibilidad de cambiar sustancialmente el orden hispanoamericano; aún más que en lo político, en lo económico y social volvió deliberadamente a las prácticas del viejo orden; en Colombia restauró el sistema impositivo colonial, en Perú proclamó, pero no aplicó, la abolición del tributo indígena. Igualmente era Bolívar sensible al nuevo equilibrio mundial de fuerzas en cuyo marco Hispanoamérica llegaba a la independencia, y –contra las tendencias aventureras que llevaban a otros a buscar el apoyo de poderes secundarios y remotos– se manifestaba dispuesto a ganar el apoyo del dominante: con una sinceridad que a otros iba a faltar proclamó una vez y otra que entre las naciones hispanoamericanas y Gran Bretaña se había establecido una relación peculiar, y con el apoyo británico contaba para consolidar ese nuevo orden republicano, que deseaba cada vez más parecido al viejo.

Ese apoyo –muy discretamente otorgado– no iba a faltar a los ambiciosos planes de organización americana de Bolívar; de ellos el más grandioso fue el congreso de Panamá; a este comienzo de liga de los nuevos países americanos –en la que sólo iban a estar presentes los delegados de Colombia, Perú, México y Centroamérica– no iba a seguir, sin embargo, nada; la iniciativa contó desde el comienzo con la hostilidad abierta de Brasil y la apenas disimulada de Buenos Aires y Chile, poco deseosos de incorporarse al sistema bolivariano. Que éste haya contado con la simpatía británica no tiene nada de sorprendente: luego de haber esperado mucho de la ruptura del orden colonial, los intereses británicos tenían motivos para temer que ésta hubiese ido demasiado lejos; una restauración de sus rasgos esenciales no podía disgustarlos. Tampoco les disgustaba el signo republicano que el sistema conservaba: la monarquía, teóricamente preferible, era una aventura aún más riesgosa, que implicaba un acercamiento a las potencias continentales. Nada dañaba a esa simpatía el hecho de que Bolívar se propusiese unificar bajo un influjo a un área muy vasta del antiguo imperio español; se ha visto ya cómo la creencia de que la nueva potencia hegemónica favoreció sistemáticamente la disgregación hispanoamericana carece de fundamento.

Este apoyo no fue bastante para salvar el proyecto bolivariano. ¿Pero por qué fracasaban las tentativas destinadas a romper la fragmentación heredada a la vez de la colonia y la revolución? ¿Por qué fracasó la de Bolívar, que comenzó contando con recursos que nunca volvería a tener ninguno de sus imitadores más tardíos? Retrospectivamente Bolívar iba a declarar imposible su éxito, y junto con él el de toda otra empresa de organización política en Hispanoamérica. Pero no sólo el proyecto bolivariano era –pese a todo su realismo– excesivamente ambicioso: ese realismo era, por añadidura, discutible, en la medida en que se apoyaba en una imagen no totalmente exacta de la realidad postrevolucionaria. En ella impresionaba a Bolívar sobre todo el peso de las supervivencias del antiguo régimen; su realismo consistía en respetarlas para asegurar al nuevo orden base suficiente en comarcas sólo superficialmente tocadas por la revolución. Pero esas supervivencias no se daban únicamente del modo en que las concebía el Libertador: las elites urbanas, a las que buscó ganar entregándoles una parte del poder en las asambleas censitarias, estaban debilitadas por las crisis revolucionarias; las rurales, tocadas por ella en su composición, pero con su poder intacto y aun acrecido, tendían a buscar apoyo en los poderes militares locales, a los que la revolución daba peso decisivo. Bolívar, sin duda, no ignoraba que el orden postrevolucionario era sustancialmente militar; para él, sin embargo, esta característica era efímera, y un orden durable sólo surgiría sobre bases necesariamente aristocráticas cuando, disipada la tormenta, volviesen a aflorar los rasgos esenciales del prerrevolucionario.

El fracaso de Bolívar puede vincularse entonces a este pronóstico errado: contra lo que él creía, las innovaciones aportadas por la guerra de Independencia habían venido para quedarse. Pero se vincula también con una dificultad de orden táctico que no pudo superar: cualquiera fuese su intención a largo plazo, Bolívar se presentaba en Bogotá, en Lima o en Chuquisaca como el representante de ese orden militar con el que no quería identificarse y, por ello mismo, encontraba el recelo de los sectores con los que se proponía compartir el poder; éstos se obstinaban en una oposición a menudo solapada, que encontraba su expresión en ese republicanismo juzgado utópico y, que siéndolo en sus manifestaciones teóricas, era a la vez expresión de fuerzas demasiado bien arraigadas en la realidad. Y los militares en los que Bolívar debía apoyarse se satisfacían cada vez menos con su papel de instrumentos de gobierno destinados a ser mediatizados en el futuro; por otra parte, mantenerse en ese papel les exigía sacrificios demasiado prolongados: significaba, por ejemplo, que las tropas colombianas debían permanecer indefinidamente guardando el orden en comarcas distantes algunos miles de kilómetros de su tierra de origen. No es extraño entonces que en casi todas partes los adversarios y los sostenes de Bolívar se hayan entendido para librarse de la tutela del Libertador; en Perú es la unión de la oposición, a la vez oligárquica y principista, y unos cuantos generales dispuestos a fructuosas transacciones lo que pone fin al ensayo boliviano; en Colombia el legalista Santander y el personalista Páez se reconcilian luego de ese derrumbe que han contribuido por igual a provocar: ese vasto sector de la Hispanoamérica postrevolucionaria, que va desde Caracas hasta Potosí, está comenzando un duro aprendizaje: el de la reconciliación consigo mismo, a partir de la cual podrá ir descubriendo los rasgos todavía secretos del orden postrevolucionario, distinto a la vez del antiguo y del imaginado en los días esperanzados de 1810.

También en el marco más estrecho proporcionado por los nuevos estados la ilusión (que se juzgaba desengañada, pero a

menudo implicaba un infundado optimismo) de que el retorno a un orden parecido al viejo era posible iba a revelarse falaz. Si en casi todas partes estos ensayos de restauración se tradujeron en rápidos fracasos, a los cuales siguió su abandono definitivo, fue en **México** donde, por el contrario, ocuparon buena parte de la primera etapa independiente. Esto no es extraño: en México los últimos tiempos coloniales habían sido aún más prósperos que en el resto de Hispanoamérica, y por otra parte la independencia se había logrado sin que perdieran la supremacía local los que a lo largo de la lucha por ella habían sido sostenes del orden colonial. El conservadurismo mexicano se transforma en el refugio de todos cuantos han sufrido resignadamente la disolución del viejo sistema. Sin duda, el imperio de Iturbide, solución demasiado personalizada a los problemas de la transición a la independencia, se derrumba sin contar con más vivo apoyo de los que serán conservadores que de los futuros liberales. La caída del régimen imperial es fruto de la acción del ejército, convocado por el pronunciamiento de un todavía oscuro jefe veracruzano, Antonio López de Santa Anna, seguido bien pronto no sólo por los oficiales surgidos de los movimientos insurgentes, sino también por muchos de los antiguos realistas, descontentos por la indiferencia con que el emperador, decidido a tomar distancias frente a sus antiguos colegas y limitado en su generosidad por la ruina del fisco, atiende a sus requerimientos. La gravitación del ejército, al que las guerras de independencia han dejado en herencia un demasiado nutrido cuerpo de oficiales y una función inexcusable de guardián del orden interno, se revela decisiva. A la caída del primer imperio sigue la convocación de una constituyente y la elección como presidente de Guadalupe Victoria, que pese a sus inclinaciones liberales intentará guardar un cierto equilibrio frente a las facciones cuya hostilidad crece progresivamente.

En la constituyente y fuera de ella, dos partidos se dibujan: los que ahora se llaman escoceses y los yorkinos. Los primeros, conservadores, tienen su organización apenas secreta en

la logia masónica escocesa, que cuenta con el patrocinio del ministro británico; los segundos, liberales y federalistas, la tienen en la que se ha establecido como filial de la de Nueva York bajo los auspicios del cónsul de Estados Unidos.

Gracias al flujo de capitales de que México aprovechará con preferencia a cualquier otro país hispanoamericano, y que vitaliza con un flujo de libras esterlinas no sólo al insaciable fisco postrevolucionario, que se transforma en deudor de inversionistas de Londres, sino también la minería deshecha por la guerra, los escoceses creen posible una reconstrucción político-social en que Gran Bretaña ocupe el papel análogo al de España, y la aristocracia minera y terrateniente criolla y la mercantil española se reconcilien para apoyar en todo vigor el nuevo orden.

Sin duda, ese orden nuevo será en algunos aspectos distinto del viejo: el ministro británico Ward, que está muy cerca de ese partido, señala que el México independiente deberá seguir importando más que el colonial, puesto que su producción artesanal textil no puede competir con la importada; encuentra la solución en una expansión de la agricultura en tierras calientes, que cree nuevos rubros exportables a ultramar y permita equilibrar la balanza comercial. Pero también para él lo primero en orden de urgencia es restaurar la minería y ordenar las finanzas públicas: sólo la primera, una vez devuelta a la prosperidad, puede ofrecer capitales para la expansión agrícola, y esos capitales buscarán más seguramente ese camino cuando un estado indigente no le ofrezca otro más lucrativo en lo inmediato en la forma del agio, que florece en México como en otras comarcas hispanoamericanas.

Los aliados mexicanos del agudo diplomático no dejaban de tomar en cuenta otros cambios. Eran en primer lugar más sensibles a los derrumbes provocados por la guerra en los sectores dirigentes: para ellos la emigración de los más ricos mercaderes españoles, luego de 1821, no era sólo importante por los más de cien millones de pesos en metálico que según era común creencia se habían llevado consigo: significaba, por

añadidura, un grave debilitamiento de una clase alta ya excesivamente minoritaria. Eran igualmente sensibles a la mayor autonomía de acción de que la experiencia revolucionaria había hecho capaces a los sectores populares; frente a esta innovación, en la que se advertía sobre todo el peligro siempre posible de un violento desborde plebeyo, los escoceses tendían a contemplar con indulgencia el peso creciente del ejército en las finanzas mexicanas. En cambio, eran menos comprensivos frente a las apetencias de esos sectores medios que, en la capital y en las ciudades de provincia, esperaban ubicarse en las estructuras administrativas del nuevo estado. Ward, que como ellos veía en esas apetencias el sentido último del federalismo, aconsejaba recogerlas; el precio que con ello se pagaría por la paz era en suma moderado. Los escoceses no estaban tan seguros; en la proliferación de políticos de clase media veían no sólo una carga para el fisco, sino aún más un riesgo de radicalización política.

Y no se equivocaban; el liberalismo terminó por hacer suya una exigencia a la vez más popular y disruptiva que la federal: era la expulsión de los españoles peninsulares. Sin duda –tal como objetaban sus adversarios– los más ricos se habían marchado ya; quedaban sobre todo pequeños hacendados y comerciantes de aldea en los que era imposible ver un peligro político. Pero precisamente eran esos españoles menos prósperos los más aborrecidos por la plebe, que tenía contacto directo y cotidiano con ellos. La agitación en favor de la expulsión de los españoles devolvía a la escena mexicana a esa plebe que los herederos de la independencia habían mantenido cuidadosamente al margen; la convocaba a la acción en favor de un proyecto que significaba el despojo de algunos relativamente ricos en favor de otros más pobres; el retorno a un desorden generalizado, animado por un recrudecimiento de las tensiones entre los que tenían y los que no tenían, parecía el desenlace esperable de esa campaña iniciada por los liberales. Pese a que éstos logran imponer la expulsión (que estará lejos de cumplirse por entero) enfrentan desde entonces una opo-

sición tenaz de los escoceses transformados –nota complacido Ward– de una pura facción política en la unión de todos los que tenían algo que perder.

Fruto de esa unión fue el conservadurismo mexicano, surgido de una ampliación de la facción escocesa. Nostálgico del pasado, de esa época de oro en que la prosa persuasiva de Lucas Alamán –el más lúcido jefe del conservadurismo mexicano, y el más desconsolado historiador de esta catástrofe que fue la revolución– transforma a la era de las reformas borbónicas, el conservadurismo había aceptado ya –y no sólo al resignarse a la hegemonía militar– algunas de las consecuencias de esa revolución aborrecida. Consciente de la democratización producida, temeroso de sus consecuencias, busca en la Iglesia apoyo contra ellas, pues ve en esa institución la única capaz de disputar la orientación de la plebe mestiza e india a los agitadores liberales. El resultado es que el conservadurismo es mucho menos ilustrado que su modelo colonial: se opone tenazmente a los avances de la tolerancia religiosa y a los de la desamortización que amenaza a la propiedad eclesiástica, no tocada hasta entonces por la revolución.

El partido conservador cree llegada su hora en el momento de designarse reemplazante para Guadalupe Victoria; en el colegio electoral lograr imponer contra el candidato liberal Vicente Guerrero a su oscuro candidato. En vano: Santa Anna se pronuncia y es rápidamente imitado; Guerrero es, a pesar de todo, presidente. Le toca enfrentar una tentativa –pronto fracasada– de reconquista española; en 1830 su vicepresidente, Bustamante, persuade al ejército de que destituya al presidente liberal, que será ejecutado ante el horror de una opinión pública que no podía dejar de respetar en la víctima a uno de los paladines de la lucha por la independencia. Durante dos años gobierna Bustamante, asesorado por Lucas Alamán, y ambos, luchando como luchan por la supervivencia, deben dejar que el ejército consuma lo que el fisco tiene y lo que no tiene. De nuevo es en vano: en 1832 se pronuncia finalmente, desde su finca de Manga de Clavo en Veracruz, el general Santa Anna. Al año siguiente es presidente; en su nombre gobiernan el vicepresidente Gómez Farias y un congreso liberal, que se lanza primero sobre los privilegios del clero y luego sobre los del ejército. Santa Anna reaparece entonces; este *Deus ex machina* de la política mexicana expulsa a los liberales y se constituye en garante del orden conservador, que restaura. Con un precio, desde luego: los conservadores deben respetar el lugar del ejército en la vida mexicana (un lugar que, entre otras cosas, le otorga más de la mitad de las rentas del Estado).

En 1836, guerra de Texas: los colonos del sur de Estados Unidos que allí se han instalado y han sido bien recibidos por las autoridades mexicanas, no aceptan el retorno al centralismo que está en el programa conservador. Santa Anna corre a someterlos: tras de vencer la resistencia del Alamo es deshecho en San Jacinto. La independencia de Texas es un hecho, pero no es reconocida por México, contra el consejo de Alamán, que deseaba ver surgir allí un estado independiente y protegido por Gran Bretaña, capaz de hacer barrera al avance expansivo de Estados Unidos.

En 1838 Santa Anna, retirado a Manga de Clavo, reconquista su prestigio en otra guerra –igualmente perdida– contra Francia, que exige indemnización cuantiosa por daños sufridos por su súbditos con motivo de las luchas civiles mexicanas. La obtendrá, pero Santa Anna, a quien una bala de cañón naval francés ha arrancado una pierna, se transforma en símbolo de una resistencia tan inútil como heroica. Así, devuelto a su papel de garante del orden conservador, siguió gravitando hasta que la guerra con Estados Unidos, estallada en 1845, le devolvió a su papel alternativo de jefe militar, llamado ahora por los liberales moderados, a los que la coyuntura acababa de devolver el poder. La guerra era el desenlace de toda una etapa de la política estadounidense; si se produjo tan tarde fue porque el Norte no deseaba fortalecer al bloque esclavista con un nuevo estado, incorporando a Texas; ahora el avance hacia el Oeste anticipaba la posibilidad de equilibrar la anexión de Texas ampliando la masa de botín con otros terri-

torios destinados a quedar libres de la institución peculiar del sur norteamericano.

La guerra fue demasiado fácilmente ganada por Estados Unidos; esa victoria se explica, en parte, porque el ejército mexicano no había sido organizado como instrumento de combate en guerras internacionales, en parte porque en México las disensiones dejadas por decenios de lucha facciosa estaban lejos de haberse apagado. En todo caso, la derrota –que tuvo, pese al heroísmo de los defensores de la capital, su punto culminante en la toma de ésta– pareció despertar las tensiones mal acalladas por el orden conservador: levantamientos indios en el Norte, guerra de castas en el Yucatán, donde la ampliación de los cultivos de azúcar estaba privando de tierras a los indios mayas mal pacificados. La paz parecía aún peor que la guerra: México perdía en 1848 la mitad de su territorio en beneficio de su vencedor. A pesar de tanta ruina, los conservadores lograban conservar el poder; su jefe intelectual, Alamán, que por esos años estaba trazando su negro cuadro del México postrevolucionario, en que distribuía generosamente culpas a todos menos a su propia facción (que lo había gobernado durante casi toda esa etapa), soñaba una regeneración definitiva en la religión y la monarquía. Mientras ésta se alcanzaba, una mano fuerte era necesaria para frenar el inquietante despertar liberal: era, muy previsiblemente, la de Santa Anna. Vuelto del destierro, éste resolvió temporariamente sus problemas financieros vendiendo nuevo territorio a Estados Unidos por diez millones de dólares. Inútilmente: al año siguiente estallaba una nueva rebelión liberal, muy distinta de los episodios militares que habían llenado la historia reciente. Con ella moría el México de Alamán y Santa Anna, el de los conservadores amigos del orden en alianza con el organizador del desorden.

La historia de esa etapa mexicana ha sido narrada una vez y otra: deliciosamente incongruente, llena de salvaje colorido (su episodio más brillante es el entierro solemne de la pierna de Santa Anna, con el ilustre héroe presidiendo el duelo), puede servir para hacer de ella un relato brioso. Menos fácil es entenderla. Santa Anna es un aventurero que no engañó mejor a sus contemporáneos que a los historiadores dispuestos a divertirse con él; Alamán y Gómez Farias, que se disputaron su favor, que al hacer de él el interlocutor favorito de los políticos dentro del ejército confirmaron su predominio sobre éste, eran, por el contrario, reflexivos observadores de la situación mexicana, y políticos consecuentes con sus ideas. Quizá era precisamente esa integridad ideológica la que los obligaba a transacciones tan chocantes con la realidad; ni en el programa conservador ni en el liberal el ejército, tal como lo había creado la guerra revolucionaria, tenía lugar legítimo; por lo tanto, los acuerdos con él se hacían en un plano en el cual el voluble Santa Anna se movía mejor que nadie. ¿Pero por qué el acuerdo con el ejército era necesario? Sin duda porque conservaba un inmenso poder, herencia de la guerra. Pero también porque ese poder seguía siendo necesario para mantener el orden interno. Por añadidura, porque lo mantenía demasiado bien, y para los liberales el camino al gobierno parecía ser un acuerdo con el ejército y no la rebelión popular, cada vez más difícil a medida que las convulsiones de la segunda década del siglo se alejaban y el orden se afirmaba mejor en México.

El orden conservador había logrado entonces el más inmediato de sus objetivos: durar. Pero ése era también el único que había alcanzado: en 1850 México no había logrado retornar a los niveles de su economía colonial; las finanzas públicas, afectadas por una contracción económica al parecer insuperable y por las exigencias de un ejército nunca saciado, hacían del Estado el deudor eterno de agiotistas locales, antes de comenzar a serlo en gran escala de acreedores internacionales. La vuelta al antiguo régimen, remozado por el contacto con las nuevas metrópolis, era imposible, y hacia 1850 la restauración conservadora no había logrado eliminar uno solo de los males contra los cuales sus voceros se habían elevado elocuentemente desde un cuarto de siglo antes.

En suma, el México conservador fracasaba por falta de una dirección homogénea; porque además eran demasiadas las

dificultades de esta zona, antes tan próspera para adaptarse al nuevo orden abierto con la independencia, que le era desfavorable. En efecto, la guerra había destruido el sistema de explotación minera; si los hombres que le había arrebatado podían ser devueltos o reemplazados, no ocurría lo mismo con las destrucciones materiales, que eran considerables. La guerra había producido un daño aun mayor, aunque indirecto, al hacer desaparecer los capitales cuya relativa abundancia era uno de los secretos de la expansión minera mexicana en la segunda mitad del siglo XVIII. Esos capitales, en parte consumidos por la guerra, en parte retirados a España a partir de 1821, hubieran sido imprescindibles para que la producción minera mexicana retomara su ritmo; en la restauración parcial que siguió a 1823, el papel del capital británico –sin embargo de volumen tan insuficiente– fue decisivo. La necesidad de ese aporte de capital es peculiar de la minería (la agricultura o la ganadería lo requieren en menor escala) y explica que México haya tardado tanto –por falta de él– en reconstruir su economía; explica también que los conservadores mexicanos, conscientes desde muy pronto de la necesidad del aporte de capital ultramarino, hayan mostrado una apertura hacia el extranjero que era excepcional entre los hispanoamericanos de esa tendencia y, que por otra parte, no siempre se compaginaba bien el misoneísmo y el intolerante tradicionalismo religioso que gustaban de ostentar. Pero esa apertura a la colonización económica de las nuevas metrópolis iba también ella a fracasar, y su fracaso es una de las causas del derrumbe conservador en México.

Desarrollos análogos, marcados por el estancamiento económico y la incapacidad de hallar un estable ordenamiento político, encontramos en las otras tierras hispanoamericanas de la plata, ahora divididas entre la república de **Perú** y la de **Bolivia.** Aquí el cuadro es aún más complicado, porque las elites sobrevivientes están necesariamente desunidas: los herederos de la Lima comercial y burocrática, los de los centros mineros

del Alto Perú, los hacendados ricos sólo en tierras que dominan la sierra desde el Ecuador hasta la raya de Argentina, los hacendados de la costa peruana, muy ligados a la fortuna comercial de Lima y golpeados por la quiebra de una agricultura de regadío y de mano de obra esclava... Y frente a ellos un personal militar que sirve alternativamente en el ejército de Perú y el de Bolivia, y está destinado a tener decisivo papel.

Mientras tanto Perú no sale de su marasmo. La crisis de la minería no termina con la guerra; la del comercio limeño es agravada por la aparición de núcleos rivales desde Valparaíso hasta Guayaquil. La agricultura de la sierra y el altiplano prosigue su desarrollo aislado; los cambios económicos de la revolución la tocan poco, los político-jurídicos también, desde que ha fracasado –en Perú como en Bolivia– la abolición del tributo y la división de las tierras indígenas de comunidad. Sin duda éstas comienzan a ser más velozmente roídas por los avances de la propiedad privada –de caciques hacendados que amplían sus tierras– pero sustancialmente resisten a esos avances. La perduración del tributo, la de los servicios personales, no pueden extrañar: debido a la crisis de la minería, cerca del 80 por 100 de los ingresos fiscales de Bolivia provienen –entre 1835 y 1865– de la capitación de los indígenas; en comarcas en que la parte de la economía de mercado ha disminuido resulta imposible utilizar el trabajo libre donde antes se recurría al forzado.

Esa región, que parece condenada a la decadencia, se presta mal a recibir un orden estable. En Perú, caído Lamar, gobierna Gamarra, y junto con él su esposa, una mestiza nacida en una aldea cuzqueña, extremadamente impopular entre la aristocracia limeña, capaz, en cambio, de evocar con éxito, ante una tropa rebelada, la solidaridad que esos soldados de sangre mezclada deben a un presidente también mestizo. Pero las divisiones del ejército perduran, la hostilidad de una oposición a la vez aristocrática y republicana no desarma. Caído Gamarra, la lucha por la sucesión permite reaparecer en la escena peruana a Andrés Santa Cruz, presidente de Bolivia,

que no ha dejado de interesarse en la política del Estado vecino, ha utilizado a Gamarra contra Lamar y ahora lo cuenta de nuevo entre sus agentes. Santa Cruz impone la unión de Perú y Bolivia; en 1836 nace la Confederación peruano-boliviana, en la que los poderes se concentran en el protector. Santa Cruz intenta ejercer, en ese marco más amplio, el mismo autoritarismo renovador que lo caracterizó en Bolivia: su dictadura reforma la administración y la justicia, reorganiza el sistema de rentas... Por un momento parece encarnar el modelo del gobernante hispanoamericano preferido por los poderes europeos; el papa, la monarquía de Julio, la diplomacia británica coinciden en otorgar su aplauso a esa experiencia. Esos remotos apoyos se revelan muy insuficientes: Santa Cruz tiene contra sí a Lima, a la que ha despojado de toda esperanza de predominio. Tiene contra sí a los que ha perjudicado con sus reformas, desde los magistrados a los funcionarios y comerciantes que se consagraban al fraude a la aduana. No tiene en su favor a los sectores populares, menos tocados que en México por la movilización revolucionaria, y perjudicados por una política que aumenta en lo inmediato el peso del fisco, y a largo plazo revela la intención de deshacer la comunidad de tierras indígenas en favor de propietarios individuales, que no se reclutarían precisamente entre los comuneros. Hacer en Perú y Bolivia un Estado moderno es, en suma, una operación demasiado onerosa, que deja indiferentes a los de arriba como a los de abajo. Esa empresa se identifica, además, con una glorificación personal del Protector, que si encuentra la burla despiadada de las elites urbanas (que no pueden olvidar que éste es hijo de una cacica india) agudiza rivalidades aún más peligrosas entre los jefes militares.

Por último, la tentativa de Santa Cruz enfrenta la oposición de sus vecinos. En la Confederación Argentina, salida a duras penas de la guerra civil, y también en Chile, Santa Cruz fomenta la acción de los opositores; frente a ambos países toma medidas destinadas a devolver a los territorios reunidos en la Confederación su viejo predominio; en particular es la hegemonía comercial de Valparaíso en el Pacífico sudamericano la que se ve amenazada. Chile se lanza a la guerra en 1837; una primera expedición contra Perú fracasa, pero le sigue en 1839 otra, que tiene éxito. En las filas de los invasores son numerosos los peruanos desafectos: a más de un sector de jóvenes aristócratas de Lima, que buscan lo que llaman la regeneración, es decir, un poder no compartido con los rudos generales de la sierra, más de uno de éstos se les ha unido contra el más poderoso de todos. Con decepción de los regeneradores limeños, Chile no se inclina por ellos, sino por Gamarra, que vuelto así al poder en 1841, lleva la guerra a Bolivia y es derrotado. En el vacío que crea su derrota los regenadores hacen finalmente su tentativa de alcanzar el poder; en Vivanco, el general aristócrata, satisfactoriamente blanco, encuentran su paladín, para fracasar junto con él: Ramón Castilla, hijo de un ínfimo burócrata peninsular y de una india, será quien logre la reconciliación de las facciones peruanas, pero si tiene éxito donde otros fracasaron es porque algo ha cambiado en Perú; ha quedado atrás el período de la penuria de Lima y la indigencia del Estado, que para sobrevivir depende de la capitación indígena que los jefes de guarniciones de la sierra pueden retener a su capricho: el guano, y más generalmente el cambio de la coyuntura económica mundial introducen a Perú, a mediados de siglo, en una nueva época, en que las elites urbanas podrán desquitarse de sus pasadas postergaciones y recomenzar la conquista del Estado.

Esa época no ha de llegar para Bolivia hasta mucho más tarde. Caído Santa Cruz, es su antiguo auxiliar, el general Ballivián, que lo abandonó en la undécima hora, quien –tras de vencer a Gamarra y asegurar la independencia boliviana– continúa su obra de modernización administrativa. En 1848 el resultado de un sucederse de revoluciones fue el ascenso a la presidencia del general Belzú, que por primera vez empleó en Bolivia la apelación a las clases populares como recurso político; aunque en la acción el nuevo presidente no se muestra muy lejos de sus predecesores, ese rasgo significa una innovación

importante en la vida política boliviana: el ingreso en ella, por lo menos como masa de espectadores impacientes, de la plebe mestiza de las ciudades (en particular de La Paz, donde funcionaba el Gobierno y donde la vuelta de la economía altoperuana a su orientación hacia el Pacífico había colocado el núcleo mercantil del altiplano). Pero, como viene ocurriendo desde 1825, la economía boliviana vive un estado de marasmo: el recurso empleado por un fisco en quiebra al acudir a una disminución del tenor de la moneda de plata (que será ahora mal recibida en tierras vecinas) hace aún más difícil a este país, al que le están faltando productos exportables, mantener las corrientes de comercio internacional. A mediados del siglo la quina parece ofrecer algún alivio, y su exportación –monopolio del Estado– beneficia a éste y a la casa concesionaria, perteneciente a una familia de vieja aristocracia paceña; no basta, sin embargo, para cambiar los datos esenciales de la economía boliviana.

No es extraño que el nuevo orden político arraigue mal en tierras que no han podido encontrar su lugar en la Latinoamérica deshecha por la revolución y lentamente vuelta a rehacer en medio de una coyuntura desfavorable. En otras partes, soluciones políticas más adecuadas a esa nueva coyuntura logran imponerse de modo más sólido.

Aun en ellas, sin embargo, la conquista de un orden estable se revela extremadamente difícil. La dificultad deriva, en parte –se ha visto ya–, de la vigencia de un nuevo clima económico, que no favorece a quienes dominaron economía y sociedad antes de 1810. Pero surge también de que el elemento que actúa como árbitro entre esos dirigentes urbanos y mineros, los de las zonas rurales de economía semiaislada, la plebe urbana que comienza a hacerse escuchar (mientras la rural no ha sido despertada en tierras peruanas por la revolución, y en las mexicanas ha sido brutalmente devuelta a la sumisión), es un ejército también él no suficientemente arraigado en el nuevo orden: sólo paulatinamente los jefes veteranos de la revolución, a los que a veces el azar de su último destino ha dado

influencia en una región a la que no pertenecen por origen, establecen vinculaciones con sectores cuyo poderío local ha sido favorecido por el cambio de coyuntura, y llegan a identificarse con ellos. Hasta entonces la intervención de los generales –y de sus tropas, a menudo ajenas también ellas a la región– se da al azar de las coincidencias entre las oposiciones que se dan dentro de la sociedad civil y las rivalidades entre jefes militares. Esa situación es consecuencia del modo particular en que México y Perú han vivido la lucha de independencia: en México ésta fracasó hasta que sus adversarios retomaron sus banderas políticas para mejor combatir sus aspiraciones en otros órdenes; en Perú se resolvió en la conquista del país por ejércitos venidos del Sur y del Norte. En otras regiones hispanoamericanas el orden nuevo iba a surgir, sobre todo, del juego de las fuerzas internas; si esto no era garantía de una evolución invariablemente pacífica, sí era condición favorable para que en algunos casos ésta se diera.

Entre los estados sucesores de la Gran Colombia, encontramos en uno de ellos una situación comparable a la peruano-boliviana: es **Ecuador,** que recoge con nombre nuevo el patrimonio territorial de la antigua presidencia de Quito. En este marco, más pequeño que el del vasto Perú, la línea de desarrollo es más sencilla: los que hacen de árbitros en la vieja y siempre vigente oposición entre la elite costeña –plantadora y comerciante– y la aristocracia de la sierra (dominante sobre una masa indígena vinculada sobre todo por el peso de las deudas heredadas de padres a hijos, y apenas tocada por los cambios revolucionarios) son militares que permanecen extranjeros a Ecuador: los venezolanos de Flores, que constituyen un cuerpo extraño hasta que sus jefes principales comienzan a tallarse dominios territoriales en la Sierra. Flores es presidente en 1830; enfrenta la oposición de la costa, encarnada en Vicente Rocafuerte, un patricio de Guayaquil, con el que se reconcilia misteriosamente, luego de una lucha civil, en 1834. Rocafuerte y Flores comparten el poder y se suceden en la presidencia;

lo que los ha unido es, al parecer, el temor de que la lucha interna haga estallar la unidad política ecuatoriana: ni Guayaquil, que, incorporado a Perú, vería sacrificados sus intereses a los de Lima, ni los militares venezolanos -que, anexada la sierra a Colombia, perderían su preeminencia en ella- pueden favorecer un desenlace que sólo es visto con favor por algunos magnates serranos, fatigados de sufrir el gobierno de los «jenízaros negros» llegados desde Venezuela para quedarse.

A esa alianza la costa imprime su actitud más abierta e innovadora; Rocafuerte, un veterano del liberalismo mexicano a quien el derrumbe de éste ha devuelto a su tierra nativa, durante su presidencia y luego de ella, anima un esfuerzo de modernización administrativa que hace de Ecuador, visto a distancia, uno de los países que enfrentan con éxito las exigencias de la hora nueva. Desde más cerca, esa modernización se revela extremadamente superficial; si la economía de la costa, cuyas posibilidades de exportar no han disminuido, se recupera con relativa rapidez de los trastornos -por otra parte escasos- que la revolución aportó, en la sierra un orden de herencia colonial no es sustancialmente tocado; al irse apagando las tensiones entre viejos y nuevos señores de la tierra serrana, la gravitación de ésta se hará sentir progresivamente, en la década del cuarenta la solución descubierta en 1834 agota sus posibilidades, y no deja en herencia a Ecuador las bases de un orden sólido.

Nueva Granada y **Venezuela,** al revés de Ecuador, ya desde 1830 se liberan de la influencia de elementos de origen extraño. La disolución de la Gran Colombia devuelve a Santander el poder en Bogotá; ya entonces se afirma el influjo militar del general Mosquera, que será dominante durante esta entera etapa, marcada por el avance paulatino del conservadurismo neogranadino. En sus comienzos el régimen, que tiene rasgos de duro autoritarismo, retoma frente a la Iglesia la tradición colonial; la quiere gobernada por el poder civil. Esta exigencia es abandonada a medida que la normalización de las relaciones con Roma hace sentir sus efectos en la Iglesia colombiana;

a mediados de la década del cuarenta ésta entra a integrar el sistema conservador en sus propios términos. Colabora así en una empresa de modernización cautamente llevada adelante; en particular domina el nuevo sistema de enseñanza elemental y los ensayos de enseñanza media y superior.

El orden conservador se apoya sobre todo en ciertas regiones neogranadinas: la franja montañosa del sur, que ha resistido tenazmente a la revolución, pero también al valle del Cauca, en cuyo curso medio e inferior los comerciantes y terratenientes de Antioquía no muestran aún el dinamismo económico que los caracterizará luego, pero ya sí un conservadurismo político y tradicionalismo religioso igualmente marcados. Frente al bloque conservador, la costa atlántica es hostil al orden establecido, que ha perjudicado a sus clases mercantiles. En Bogotá hay también una tenaz oposición liberal; esa ciudad, crecida gracias a sus funciones políticas, reúne una turba de empleados mal pagados y una elite cuyos hijos quieren vivir al ritmo del mundo, y se preguntan si la solución política adoptada por Nueva Granada sería juzgada suficientemente moderna en París, con un sector de artesanos capaces de capitanear en momentos confusos a turbas de plebe descontentas, y descontentos ellos mismos con los avances del comercio externo, que aunque esencial es para asegurar la salida de los frutos de los terratenientes ganaderos de la sabana (los cueros, que comienzan por dominar las exportaciones de la Nueva Granada independiente) e igualmente para la prosperidad de la agricultura de exportación, condena, en cambio, a lenta ruina a las artesanías locales. Esos descontentos, basados en razones a menudo contradictorias, se unen en una oposición que, pese a llamarse liberal, acepta mucho de las tendencias del orden conservador: sólo le reprocha su adhesión a un catolicismo cada vez más militante en la oposición al espíritu del siglo y a la vez la timidez con que emprende el camino de la modernización. Pero de la etapa conservadora son las primeras tentativas de navegación a vapor en los ríos neogranadinos y de construcción de ferrocarriles, y el ritmo a

menudo lento de los desarrollos futuros mostrará que el éxito limitado de esos ensayos no puede achacarse solamente a la timidez del régimen conservador.

Nueva Granada presenta por esos años, como se ve, un modelo político para tierras más agitadas. ¿Cuál es el secreto de este éxito, relativo pero indudable? Notemos en primer término el papel relativamente secundario del ejército neogranadino; en segundo lugar, la existencia de fuertes diferenciaciones regionales, que está lejos de ser tan sólo un factor de inestabilidad, puesto que gracias a ella se da una fragmentación de esa clase alta –que tiene un cuasi monopolio del poder político– en grupos locales relativamente indiferentes a la marcha de la política nacional mientras ésta no afecte ni su preeminencia local ni sus intereses concretos. Esas divisiones regionales son todavía de otra manera un factor de cohesión: crean vínculos entre las aristocracias y los demás sectores sociales de las distintas regiones, particularmente importantes en Nueva Granada porque la población rural mestiza no es tan pasiva ni está tan sometida como en las tierras andinas más meridionales. La ferocidad de las guerras civiles que Nueva Granada conocerá a partir de la segunda mitad del siglo XIX, las cifras insólitamente altas de caídos en ellas, revelarán de nuevo a su modo esa solidez mayor del cuerpo político, en la medida en que éste está dispuesto a movilizarse para esas luchas con una amplitud que sería impensable, por ejemplo, en Perú.

En 1830 el pronóstico sobre el futuro político venezolano habría debido ser acaso más pesimista que respecto del neogranadino. Arrasada por la guerra, que fue allí particularmente feroz, con sus aristocracias costeñas arruinadas y entregadas al dominio de ejércitos formados por mestizos llaneros y mulatos isleños, Venezuela parece condenada a una extrema inestabilidad. El rumbo es otro: bajo la égida de Páez, presidente durante largas etapas, y de otros jefes militares de la independencia, lo que se da es una reconstrucción económica y social sobre líneas muy cercanas a las del orden prerrevolucionario. La posibilidad de exportar a un mercado ampliado permite la expansión productiva en la costa: en 1836 se sobrepasan los niveles de exportaciones inmediatamente anteriores a 1810, y desde entonces el proceso ascendente prosigue por unos años; la economía venezolana, apoyada ahora en el café antes que el cacao o el azúcar, sufre, sin embargo, con la crisis de precios en la década siguiente.

El orden conservador comienza entonces a mostrar sus quiebras. En primer lugar, el retorno a un orden semejante al colonial hace nacer tensiones muy duras: los beneficiarios del sistema son grandes comerciantes que se reservan lo mejor del negocio cafetero y grandes propietarios, que en el litoral intentan rehacer una economía de plantación devolviendo a la esclavitud a los negros emancipados a todo pasto durante las guerras de independencia, y en los Llanos buscan imponer una más estricta disciplina de trabajo para utilizar en pleno las posibilidades abiertas a la exportación de cueros. Sin duda, la revolución ha introducido nuevos miembros en los sectores privilegiados: son los jefes militares que ahora gobiernan a Venezuela; Páez, antes capataz en una hacienda llanera, es ahora gran propietario de tierras, y no es el único... En cambio, los soldados veteranos no ven facilitado el acceso a la tierra que le fue prometido; las que se les distribuyen suelen venderlas (Páez las compró en abundancia a sus soldados, a precio muy bajo) o perderlas cuando el legalismo retrospectivo de la república conservadora anule las confiscaciones que perjudicaron en el pasado a los realistas.

A mediados de la década del cuarenta, los descontentos se acumulan; el que primero se hace sentir es el de algunos de los beneficiarios del sistema; algunos grandes señores de Caracas, devueltos a la prosperidad, se fatigan de ocupar políticamente el segundo lugar tras de los rudos generales de la revolución, y organizan una oposición liberal, a la que un periodista de talento, Antonio Leocadio Guzmán, hace extremadamente popular entre la plebe caraqueña. Pero la protesta liberal no se limitará, finalmente, como en otras partes de

Hispanoamérica, a la ciudad: la campaña, con sus ex soldados fugitivos o mal adaptados a una disciplina de trabajo cada vez más rígida, con sus cultivadores que tienden a ver en la aristocracia mercantil a la causante única de su ruina (en verdad ésta se ha limitado a descargar el peso de la crisis sobre los agricultores), presenta tensiones aún más serias que las de la ciudad, y en una y otra se anuncia a través de múltiples signos un futuro menos sereno que los años de consolidación del orden postrevolucionario.

En **América Central** las dificultades hubieran debido ser acaso menores: esta tierra no conoció revolución ni resistencia realista; pasada en 1821, junto con México, de la lealtad a Fernando VII a la independencia, se separó de su vecino del Norte a la caída de Iturbide, a quien seguían fieles los jefes de las guarniciones del antiguo ejército regio acantonadas en la capitanía de Guatemala. Surgen así las Provincias Unidas de América Central: destinadas a vida breve y azarosa, son desgarradas por la lucha entre liberales y conservadores, que se superpone a la oposición entre Guatemala –tierra de economía semiaislada y población india, dominada por una minoría española de estilo señorial– y El Salvador, rincón que proporciona la mayor parte de las exportaciones ultramarinas de Centroamérica (el primer rubro de ellas sigue siendo el índigo), de propiedad más dividida y población mestiza. Los liberales, acusados de querer gobernar la vida eclesiástica, se han propuesto crear un obispado en San Salvador, y quieren llevar allí la capital... Bajo la jefatura de Morazán dominan la política centroamericana; en 1837 una rebelión en la sierra guatemalteca revela la presencia de un jefe temible, Rafael Carrera; los aristócratas de la ciudad de Guatemala llaman contra él al aborrecido Morazán, que fracasa. Carrera conquista Guatemala, la separa de la unión centroamericana y la gobierna en alianza con los conservadores; el jefe de la plebe rural de color se transforma en columna del orden, y a cambio de ello recibe el gobierno vitalicio de la República de Guatemala, salvada

por él para la fe verdadera. En algunos puntos el caudillo mestizo se muestra más dúctil que sus aliados de la aristocracia terrateniente: recibe con cordialidad a los extranjeros, aun a los heréticos ingleses y estadounidenses. La pérdida de Guatemala deshace a la confederación: El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se constituyen en diminutos estados republicanos; por el momento –salvo en Costa Rica, donde, como se ha dicho, está comenzando la expansión del café– poco ha cambiado en esos despoblados rincones del imperio español. En Guatemala –donde Carrera domina hasta su muerte la escena– la alianza entre aristocracia tradicional y poder militar adquiere matiz original porque este poder es el de una milicia improvisada, desvinculada de las tradiciones militares coloniales o revolucionarias, y su jefe proporciona acaso el ejemplo más extremo de *homo novus* llevado al poder por la militarización postrevolucionaria.

En el extremo sur de Hispanoamérica el **Río de la Plata** sufre una evolución compleja, por el momento más rica en fracasos que en éxitos duraderos. El **Paraguay** comienza su vida independiente en una experiencia cuyos rasgos extremos le gana la atención curiosa de observadores europeos: luego de ser gobernado por un efímero triunvirato, el país cae en 1812 bajo el dominio del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia; este abogado de la universidad de Córdoba, hijo de un comerciante portugués, impone una férrea dictadura y aísla Paraguay de sus vecinos, cuyas turbulencias juzga un ejemplo peligroso. Ese aislamiento se extiende a la economía: los pocos contactos que quedan a Paraguay con el resto del mundo se hacen mediante comerciantes brasileños autorizados a título individual por Francia. Las consecuencias están lejos de ser únicamente negativas; esa sociedad mestiza, de necesidades sumarias, puede renunciar sin excesivo sacrificio a consumos ultramarinos; la disminución de las actividades vinculadas con la exportación (yerba y sobre todo tabaco) asegura una abundancia de los productos de consumo local que hace a la época de Francia

un período de bienestar popular. Por otra parte, el dictador gusta de apoyarse en la plebe mestiza contra la poco numerosa aristocracia blanca; si ésta no es despojada de sus tierras, es junto con los comerciantes víctima de un sistema que hace desaparecer casi por entero los cultivos destinados a mercados externos.

Frente a los críticos de su sistema de riguroso aislamiento, Francia hubiera podido invocar las devastaciones que una actitud más abierta había producido en el resto del Río de la Plata. Allí, luego de la disolución del estado revolucionario heredero de la administración virreinal, que se había producido en 1820, la búsqueda de un nuevo orden estable fracasó, pese a que tuvo a su servicio la energía indomable y los múltiples talentos de Juan Manuel de Rosas.

La disolución del estado unitario en 1820 había estado lejos de constituir una calamidad sin mezcla: sirvió para liquidar bruscamente una situación ya insostenible. Pero en esa liquidación no sólo salía destrozado el centralismo de Buenos Aires, sino también el federalismo del resto del litoral, que había tenido en Artigas su paladín. La política de **Buenos Aires** alcanzaba un éxito póstumo cuando los portugueses concluían la conquista de la Banda Oriental y convertían el antiguo Protector de los Pueblos Libres en un fugitivo cada vez menos respetado por sus secuaces del litoral argentino; éstos obligaron a Artigas a buscar en Paraguay un refugio que Francia convirtió en cautiverio; luego emprendieron luchas por la supremacía, que permitieron a Buenos Aires, derrotada en 1820 y transformada en una provincia más de una vaga federación sin instituciones centrales, alcanzar en el litoral argentino una hegemonía indiscutida. Armada de ella, la provincia de Buenos Aires se opuso a la tentativa de reorganización del país, que en nombre de las de Tucumán y Cuyo (convertidas casi póstumamente al federalismo, luego de haber sido columnas del régimen centralizado, y gobernadas muy frecuentemente por quienes habían sido antes agentes del desaparecido Gobierno central) dirigió el gobernador de Córdoba, Bustos.

Este apego al sistema de disolución nacional se explica: gracias a él la provincia de Buenos Aires, dueña de las comunicaciones con ultramar, y por lo tanto de las rentas de aduana, ya no debe emplearlas en mantener un aparato administrativo y militar que excede sus límites. Por otra parte, la disolución del Estado ha puesto fin, de hecho, a la participación argentina en la guerra de Independencia. La nueva provincia se encuentra rica y libre de compromisos externos; puede consagrarse a mejorar su economía y su organización interior. Este programa encuentra el apoyo de una clase nueva de hacendados (entre los que ha encontrado refugio buena parte de la riqueza mercantil expulsada de su campo tradicional por la competencia británica). Frente a la ruina de las tierras ganaderas del resto del litoral, las de Buenos Aires prosperan gracias a la paz interna. Comienza «la admirable experiencia de Buenos Aires»; bajo la égida de Martín Rodríguez, un general que ha consagrado las etapas más recientes de su carrera a combatir contra los indios en acciones muy cercanas a las de policía rural, los hombres más ilustrados del que se llama a sí mismo partido del orden improvisan un brillante régimen parlamentario: reducen el cuerpo de oficiales, reforman el sistema aduanero disminuyendo las tasas y aumentando los ingresos del Estado, ordenan el crédito público y crean un banco destinado a combatir las tasas de interés demasiado altas. Al mismo tiempo llevan adelante una reforma eclesiástica, clausuran conventos y muestran una simpatía por la libertad de cultos que –si encuentran escaso apoyo en buena parte de las clases ricas– no bastan para enajenar al gobierno el favor de éstas. Detrás de esas reformas se encuentra Bernardino Rivadavia, hijo de un rico comerciante peninsular, que ha gustado de actuar como influyente de segunda fila desde 1810: ahora, como ministro, su figura es por el contrario abiertamente dominante.

Pero la experiencia de Buenos Aires tiene éxito sólo porque un conjunto de problemas han sido dejados de lado; éstos no han sido eliminados. Uno de ellos es el de la organización del país; otro, el de la **Banda Oriental,** donde el dominio de los

portugueses, y luego brasileños, es una ofensa al orgullo nacional. Esos problemas son actualizados por la necesidad de dar al país una personalidad internacional, y por el interés efímero que despierta en los inversores británicos, que algo anacrónicamente se orientan más bien que hacia las nuevas riquezas del litoral hacia las bastante míticas minas de plata del interior.

Un alzamiento nacional exitoso en la Banda Oriental pone al Gobierno de Buenos Aires, apasionadamente adicto a la paz, ante el incómodo presente de un territorio liberado de portugueses, que pide ser incorporado a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ya en ese momento, Buenos Aires ha convocado un congreso constituyente, que sus diputados dominan pero con el que no saben muy bien qué hacer. En ese congreso, más de un representante del interior intenta hacer del proyectado poder nacional un instrumento de transformación de situaciones provinciales: los diputados, elegidos de entre la clase letrada por los caudillos militares que dominan esas provincias, esperan, en efecto, que el congreso les abra el camino para una reconquista del poder local. Los diputados de Buenos Aires vacilan en tomar ese camino: finalmente entran en él porque las divisiones de su propio partido local los obligan a contar con sólido apoyo mayoritario en el congreso; desde entonces son prisioneros en él de la corriente hostil a los gobernantes del interior. A la vez, y por razones parecidas, empujan a la guerra con Brasil. En Buenos Aires el Gobierno del partido del orden había contado con la oposición constante de la plebe urbana. Dirigida por algunos oficiales del ejército revolucionario, esa oposición popular usaba argumentos patriótico-belicistas que ahora encontraban eco entre algunos notables que, habiendo gravitado sobre el gobernador Rodríguez, eran menos escuchados por Las Heras, su sucesor desde 1824, pero dominaban la diputación de Buenos Aires al congreso constituyente.

La guerra con Brasil llevó a anular muchos de los cambios que había traído 1820: de nuevo era preciso costear un ejército, devolver gravitación a los oficiales veteranos de la Independencia y arruinar al fisco. La guerra trajo además el bloqueo y –como en el país adversario– la inflación, también aquí a base del recién inventado papel moneda inconvertible. Declarada a fines de 1825, la guerra culminaba en 1827 con la victoria argentina de Ituzaingó, que el vencedor no era ya capaz de aprovechar en pleno.

Recibida con general beneplácito cuando no se habían adivinado las penurias que traería consigo, la guerra era cada vez más impopular entre los ricos de Buenos Aires, y era ahora la primera causa de desconfianza frente al nuevo espíritu aventurero de los dirigentes del antiguo partido del orden que dominaban el congreso constituyente. Éstos iban bien pronto a dar nuevos motivos de alarma a la opinión: harían presidente de la república a Rivadavia, y excediendo descaradamente sus atribuciones pondrían a la entera provincia de Buenos Aires bajo la autoridad del Gobierno nacional; esa maniobra, que los libraba de Las Heras y sus antiguos aliados, y ahora rivales, les ganaba la aversión definitiva de las clases altas de Buenos Aires. Mientras tanto, la redacción de una constitución unitaria terminó de enajenar al congreso la buena voluntad de los gobernantes del interior, ya comprometida por episodios como la aprobación del tratado de comercio y amistad con Gran Bretaña, que imponía la libertad de cultos aun en las provincias interiores, y por otros más turbios, vinculados con las rivalidades entre compañías mineras organizadas en Londres con el auspicio de Rivadavia y otras igualmente lanzadas al mercado de la City con el de hombres influyentes del interior.

La guerra civil estalló primero en el Norte y luego en el centro del país; Facundo Quiroga, jefe de las milicias de los Llanos de la Rioja, terminó por dominar allí. Finalmente, tras de una resistencia cuya obstinación irritó a lord Ponsonby, enviado como mediador por el Gobierno de Londres, Rivadavia se avino a tratar la paz con Brasil; el tratado firmado por su agente y émulo García, que devolvía a Brasil la provincia

oriental, fue rechazado por el presidente y el congreso. Pero el régimen presidencial estaba muerto; a la renuncia de Rivadavia siguió la restauración de la provincia de Buenos Aires, gobernada por el jefe del antiguo partido de oposición, el coronel Dorrego. Por detrás de él eran los antiguos sostenes sociales del partido del orden los que volvían a gravitar, obligando a Dorrego –personalmente adicto a una guerra a ultranza– a seguir las negociaciones de paz. Éstas culminaban en 1828 en un tratado que creaba un nuevo estado independiente: la República Oriental del Uruguay, en cuya viabilidad por el momento nadie creía demasiado. Vuelto de la Banda Oriental, el ejército argentino se apresuró a derrocar y ejecutar a Dorrego (diciembre de 1828): el general Lavalle, jefe del movimiento, asumió la responsabilidad de la decisión que le había sido aconsejada por algunos prohombres del antiguo partido del orden, ahora rebautizado unitario. La ejecución de Dorrego, seguida de un gobierno militar que gravitaba duramente sobre la campaña fatigada de guerra, provocó un alzamiento rural que reconoció como jefe a Juan Manuel de Rosas, un próspero estanciero del sur que había organizado una eficaz milicia regional en su rincón de frontera. En seis meses el régimen militar se derrumbó en Buenos Aires, y el camino al poder quedó abierto para Rosas. Mientras tanto, el movimiento antifederal era más exitoso en el interior, donde un jefe cordobés, el general Paz, se apoderaba de su provincia y luego vencía a Facundo Quiroga, obligándole a refugiarse en Buenos Aires. Nueve provincias caían bajo su dominio, mientras las cuatro litorales le eran adversas. Capturado Paz por sorpresa en 1831, Quiroga reconquista el interior, y Argentina es de nuevo una laxa unión de provincias, dominada por Rosas, López (gobernador de Santa Fe) y Quiroga.

Entre ellos es Rosas la figura dominante, no sólo porque –del mismo modo que en 1820– Buenos Aires, momentáneamente disminuida por su adhesión a una causa perdida, recupera muy pronto su ascendiente, sino también porque su gobernador es el único jefe federal que ha asimilado la

experiencia de la crisis pasada para deducir de ella un arte de gobierno. Este miembro de las clases económicamente dominantes de Buenos Aires ha entrado en política por reacción frente a los errores de la clase política en la que había confiado; al viejo partido del orden le reprocha haber traicionado minuciosamente su programa. Pero ya no es posible volver a él: la politización masiva, la faccionalización son hechos irrevocables. El orden sólo puede reconquistarse por la victoria total de un partido sobre otro. Pero en Argentina los partidos carecen de cohesión: eficientes para deshacer la paz interna, no bastan para apoyarla. Rosas quiere armar uno que sirva también para esto, mediante una propaganda masiva que termina por obligar hasta a los caballos a llevar escarapela roja en signo de adhesión al federalismo, pero que utiliza también medios más sutiles, como una prensa no siempre burda en sus argumentos... Será la plebe fanáticamente federal la que discipline por el terror a los colaboradores necesarios pero inseguros que proporcionan las clases ilustradas. En la provincia de Buenos Aires esta política tiene éxito, y Rosas, gobernador entre 1829 y 1832, lo es de nuevo a partir de 1835 con la suma del poder público. Pero tiene menos éxito en el interior, donde ha faltado una politización igualmente intensa, y donde es sobre todo el temor a la intervención porteña el que acalla a los jefes provinciales, poco adictos a una estricta disciplina de partido. Además esa política obliga a Rosas a satisfacer el extremismo, por él alimentado, de una opinión pública de la que depende: apresado dentro de un esquema en el que ha comenzado por creer sólo a medias, Rosas debe llevar adelante una eterna guerra santa contra sus adversarios, a los que presenta abusivamente como herederos de los unitarios de 1825 y 1828. El clima de la Argentina rosista es la guerra civil, con complicaciones internacionales, sobre todo surgidas del turbulento Estado Oriental.

Éste ha estado sometido a la acción contrastante de dos caudillos rurales, Lavalleja y Rivera. Ambos son hacendados; el primero se presenta como el portavoz de su grupo; el segun-

do y más opulento usa su popularidad entre los peones, campesinos sin tierra, mínimos hacendados en tierra ajena, en suma entre los gauchos que treinta años de inestabilidad habían hecho aún más díscolos en la campaña uruguaya. Rivera terminó por triunfar; luego de gobernar el nuevo Estado con soberbia indiferencia por los preceptos de la ciencia financiera, dejó en 1835 el mando a un sucesor elegido por su influjo. Éste, Manuel Oribe, era un hombre de la elite urbana de Montevideo, demasiado largamente oprimida por los caudillos de la campaña, dispuesta a buscar apoyo contra ellos fuera de Uruguay, ya fuese en Buenos Aires, ya en Brasil. Oribe se había inclinado a la primera solución, y había transferido sólo lentamente su lealtad del unitarismo de Rivadavia al neofederalismo de Rosas; como presidente mostró frente a Rivera veleidades de independencia, juzgadas insultantes por éste, que se lanzó a la revuelta. Apoyado por los antirrosistas desterrados, por algunos de los revolucionarios de Río Grande, por la plebe rural, Rivera gana finalmente también el apoyo de la diplomacia francesa, que ya ha entrado en conflicto con Rosas. Toma Montevideo y Oribe se refugia en Buenos Aires; Rosas, que lo ha juzgado sospechoso de debilidad con los unitarios, adopta casi póstumamente su causa y no dejará ya de luchar por la restauración del que llama presidente legal de Uruguay.

Mientras tanto debe enfrentar el bloqueo establecido en 1837 sobre Buenos Aires en defensa de las exigencias discutibles (y en todo caso insignificantes) de algunos súbditos franceses. Las penurias traídas por el bloqueo le enajenan simpatías en el litoral, mientras las de la guerra con la confederación peruboliviana crean una corriente antirrosista en el norte argentino. Las rebeliones se suceden: en 1839 el sur ganadero de Buenos Aires se levanta también, y un millar de gauchos de esa cuna del federalismo rosista emigran, luego de la derrota, a servir en el ejército que organiza Lavalle. Éste, con apoyo francés, avanza sobre Buenos Aires; en agosto de 1840 se retira, en octubre una matanza oficiosa de desafectos –atribuida por el Gobierno a la anónima cólera popular, pero interrumpida en un instante, y sin incidentes, luego de la protesta del agente británico– marca el comienzo del desquite rosista. Éste se inaugura con un tratado con Francia: la crisis de Siria obliga a la monarquía de Julio a abandonar sus agresiones hispanoamericanas, dejando sobriamente entregados a su destino a sus aliados locales. Rosas cede en casi todos los puntos en litigio, pero luego de que Francia se ha lanzado en vano a una campaña abierta para derribarlo se considera –sin equivocarse– el triunfador en el conflicto. La victoria sobre sus adversarios internos es más fácil: un ejército cuyas tropas comanda Oribe conquista el interior, hasta la frontera de Bolivia y la de Chile, e impone en todas partes gobernadores adictos a Rosas; desde 1842 éste tiene un poder que ningún anterior gobernante había alcanzado sobre el conjunto del territorio argentino.

La guerra prosigue en la Banda Oriental. Vencido Rivera, Oribe domina la campaña, mientras tropas argentinas sitian a Montevideo; los comerciantes de la ciudad sitiada logran que una fuerza naval británica levante el bloqueo puesto por la escuadra de Buenos Aires.

Es el comienzo de un nuevo conflicto internacional, que sirve de campo de prueba del acercamiento anglofrancés esbozado por el gabinete conservador de Londres. Buenos Aires volverá a ser bloqueada en 1845, y una expedición guerrero-comercial penetrará en el Paraná, que Rosas mantiene –como todos sus predecesores– cerrado a la navegación extranjera. Estos éxitos no bastan para derribar a Rosas; los agresores, fatigados de una operación cada vez más costosa (para su propio comercio), retoman el camino de las negociaciones, que Rosas encara sin ansiedad. Montevideo sobrevive gracias a subsidios franceses; en 1849-50 los acuerdos angloargentinos parecen entregar a su destino a la Nueva Troya. Surge entonces una nueva coalición antirrosista: terminada la rebelión riograndense, Brasil vuelve a gravitar en el Plata; Urquiza, el gobernador de Entre Ríos, Brasil y el Gobierno de Montevideo se unen, y Urquiza, tras de expulsar a Oribe de Uruguay, invade Santa Fe para se-

guir sobre Buenos Aires. En Caseros, cerca de cincuenta mil soldados se enfrentan; el ejército rosista (cuya marcialidad había impresionado al representante británico en Buenos Aires, que aun en la víspera tuvo tiempo de comunicar a Londres su pronóstico de segura victoria para las fuerzas del orden) se desbandó luego de un brevísimo combate, y el gobernador, tras dimitir el cargo, marchó al destierro inglés.

Termina así la época de Rosas; durante ella, pese a todas las vicisitudes, Argentina prosperó. Esa prosperidad es sobre todo la de la provincia de Buenos Aires, que si tiene que dar tropas para los ejércitos rosistas, por lo menos no conoce invasiones ni luchas en su territorio, salvo el paso fugaz de Lavalle en 1840. Es la más tardía del litoral ganadero: en la década del cuarenta, Entre Ríos y Corrientes –concienzudamente arrasados por las guerras civiles– comienzan a adquirir importancia nueva; en particular en la primera de esas provincias una clase terrateniente muy poco numerosa y muy rica comienza –algo prematuramente– a sentirse rival de la de Buenos Aires; acepta en pleno el programa de libre navegación de los ríos que, según cree, la emancipará de esos rapaces intermediarios que son los comerciantes de la capital de Rosas; es ese programa el que gana también la voluntad de Brasil, ansioso de asegurarse contacto fluvial con sus tierras interiores. (Los emigrados de Buenos Aires, que lo proponían tan persuasivamente, no ignoraban, por su parte, que los grandes comerciantes porteños ya no necesitaban apoyos políticos para retener su predominio...) Pero la prosperidad comenzaba también a ser la del interior: a partir de 1840 las provincias centrales y andinas comienzan a recibir un eco de la que se afirma más allá de los Andes; la misma dureza del dominio político porteño, al disciplinar la vida política local, favorece el proceso: las elites locales comienzan a reconciliarse discretamente en una adhesión unánime pero dudosamente sincera a la política de Rosas; las legislaturas provinciales de San Juan, La Rioja o Tucumán tienen entre sus miembros a desterrados políticos recientes; otros vuelven a jefaturas de milicias desde sus refugios transandinos o desde la

tierra de indios. «San Juan», dice el desterrado sanjuanino Sarmiento, «es más afortunada que otras provincias»; «Tucumán», dice el desterrado tucumano Alberdi, «conoce una tolerancia excepcional». Casi todas las provincias han terminado por ser las más afortunadas, y las elites urbanas, que en 1825-1830 han fracasado en su intento de reconquistar el poder, lo están ahora sitiando pacífica y victoriosamente.

Las administraciones de orden reflejan pálidamente en la Argentina rosista el que es en la primera mitad del siglo XIX el éxito más considerable de la Hispanoamérica independiente: el de la república conservadora de **Chile.** En la década del veinte muy poco parecía anunciar ese éxito: Chile había enfrentado experiencias extremadamente agitadas. O'Higgins había intentado organizar un autoritarismo progresista de raíz borbónica: había fracasado bien pronto, acusado de despotismo luego de chocar con los terratenientes por su reforma del sistema de herencia, con la Iglesia por su tolerancia con los disidentes, con la plebe por su pretensión de limitar sus festejos tradicionalmente tumultuosos. Refugiado en Lima, dejó el camino abierto a una experiencia liberal y federal que no fue capaz de fundar un orden estable. Reaccionando frente a ella, Diego Portales puso las bases del orden conservador. Este hombre de modesto origen, efímeramente enriquecido en el comercio de Valparaíso, se lanzó a la política en representación de un grupo –el de los agiotistas– al que la penuria pública había hecho surgir en Chile como en otras partes, y en cuyo nombre exigía una atención mayor a las necesidades de un orden más estable; en su apoyo Portales convocaba el descontento plebeyo, a la vez que el de los terratenientes, que añoraban tiempos más serenos.

La victoria del general conservador Prieto sobre el liberal Freire hizo al vencedor presidente y a Portales ministro todopoderoso: desde el gobierno impuso un orden muy rígido en lo político y en lo social, combatiendo el endémico bandidaje rural. El sistema conservador –católico, autoritario, enemigo

de novedades– se expresó en la constitución de 1833; bajo su égida Chile conoció un orden que fue despersonalizándose, luego de superar las pruebas del asesinato de Portales (1837) y la guerra con la confederación peruboliviana. Ese orden fue presentado a la opinión pública hispanoamericana en términos muy idealizados por los jóvenes emigrados argentinos antirrosistas (Sarmiento, López, Alberdi) que, acusados en su patria de ser agentes de ideas disolventes, eran recibidos sin alarma por el Chile conservador que les abría sus periódicos, sus cátedras y, a veces, sus magistraturas.

Esa idealización disimula algunos rasgos de la realidad chilena, pero subraya otros muy reales: es real, por ejemplo, la institucionalización, acompañada de una liberalización lenta del régimen, sobre todo a partir de 1841 y 1851 (presidencia de Manuel Montt, que tuvo que enfrentar a los sectores más cerradamente conservadores). Esa liberalización se vinculaba además con cambios más generales en la vida chilena: de 1831 es el comienzo de un período de expansión minera del Norte Chico, que crea, al lado de la clase terrateniente del valle central que es la dominante en la república conservadora, un grupo de riqueza más nueva que introduce también en la capital un estilo de vida menos sencillo y tradicional. Por otra parte, una aristocracia que vivía de la exportación, como la chilena, había debido limitar espontáneamente, en atención a sus intereses económicos, la preferencia, basada en criterios ideológicos y religiosos, por el aislamiento; las más tenaces resistencias no impiden los progresos hacia la libertad de culto disidente, que es el de los ingleses que dominan el comercio de Valparaíso. Notemos, por último, que la preocupación conservadora por ampliar la enseñanza crea grupos de origen a veces humilde dotados de nueva capacidad de articular sus puntos de vista, y poco satisfechos del lugar muy marginal que, salvo excepciones, el orden conservador les reserva. A mediados de siglo, como los otros países hispanoamericanos que conocen menos gloriosos regímenes conservadores (Colombia o Venezuela), Chile aparece trabajado por un descontento muy vasto: aún más que en aquellos países, en Chile, tras de los voceros más ruidosos de ese descontento, se dibujan nuevos sectores altos (los mineros) que aspiran a compartir el poder y combaten por él desde posiciones de fuerza económica ya muy considerable.